

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
AL TRABAJO Y MÍNIMO VITAL DE LOS MINEROS ANCESTRALES DEL
MUNICIPIO DE VETAS (SANTANDER) DURANTE EL PERIODO 2016 -2019



CONTRERAS DELGADO MÓNICA ALEXANDRA

DELGADO PINZÓN DIANA PATRICIA

UNIVERSIDAD LIBRE

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO

SOCORRO, 2020

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
AL TRABAJO Y MÍNIMO VITAL DE LOS MINEROS ANCESTRALES DEL
MUNICIPIO DE VETAS (SANTANDER) DURANTE EL PERIODO 2016 -2019



CONTRERAS DELGADO MÓNICA ALEXANDRA

DELGADO PINZÓN DIANA PATRICIA

DR. YESID ALBEIRO SÁNCHEZ SANDOVAL

DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO

UNIVERSIDAD LIBRE

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO

SOCORRO, 2020

PÁGINA DE ACEPTACIÓN

NOTA DE ACEPTACIÓN

DRA. ANA CAROLINA BERNAL BUENO
JURADO

DRA. HÍNGRID CAMILA PÉREZ BERMÚDEZ
JURADO

Socorro, 2020

DEDICATORIA

Relata la canción que, en lo alto de la cordillera, se encuentra un pueblito que es mi adoración, bellas flores, dorados trigales, bellos manantiales, mina y socavón. Es mi Vetás, mi pueblo minero, el pueblo que quiero, al que hoy le dedico este trabajo, a la valentía de sus hombres y mujeres que día a día se levantan con la esperanza de encontrarse con el precioso metal, para sustentar sus familias y seguir adelante para tener un mejor mañana.

Hoy dedico este trabajo a mi Padre, Nicolás Arquímedes Contreras Rojas, quien a lo largo de 54 años ha ejercido con valentía, honor y dedicación la ardua labor de ser minero, hombre valiente que, a pesar del frío, del trabajo pesado, del riesgo dentro del socavón, siempre amó la profesión de ser minero y ese amor lo transmitió a sus hijos.

A mi madre y hermanos por estar siempre pendientes de este proceso y dispuestos a colaborar en lo que fuera necesario.

A mi hijo, José Camilo, porque es el destinatario fiel de todos mis esfuerzos, porque cada uno de ellos lo enorgullece y me hace sentir agradecida con lo que la vida me brinda y le puedo corresponder, para que tenga como base la maravillosa pedagogía del ejemplo en su vida.

Dedico este trabajo a Ivonne Consuelo González Jácome, Presidenta de “ASOMINEROS”, quien desde hace muchos años ha luchado desde todos los escenarios de la ciudadanía y la institucionalidad, para que Santurbán sea respetado y los mineros y habitantes de Vetás no sean estigmatizados en nuestro país.

Y a cada uno de los Vetanos, de mis paisanos, que ejercen con orgullo y pasión, así como con fortaleza y dignidad la minería, pero que han logrado también con el paso de las

décadas y de los siglos cuidar el más grande tesoro que tenemos los seres humanos, el agua.

Sin ellos hoy no habría Páramo de Santurbán.

Mónica Alexandra

Al Padre Celestial creador de la vida por todas las bendiciones recibidas a lo largo de mi vida, a mis padres y hermanos que han estado siempre apoyándome, a Zoila Rosa Hernández Carvajal quien ha sido mi faro a seguir que con su ejemplo me ha enseñado que los éxitos se consiguen con esfuerzo, disciplina y amor en todo lo se hace en este camino del ejercicio de la profesión que amo, ser abogada.

Diana Patricia.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos enormemente a nuestro Director de Tesis, Doctor Yesid Albeiro Sánchez Sandoval, quién con sus conocimientos, sabiduría y paciencia nos acompañó y guió durante este proceso, en un tema tan álgido que produce escaladas emociones y diversas posturas alrededor de la sociedad actual.

Agradecemos a la Empresa Minera Reina de Oro, por permitirnos a través del Capitán Minero, Señor Orlando Moncada, conocer sus instalaciones y aprender de manera directa el ejercicio de la actividad que desarrollan a diario.

Agradecemos también a Giorgi Gelves, quién fue nuestra guía en la caminata por el municipio más alto de Colombia y nos permitió evidenciar que la riqueza de Vetas no radica solo en el oro, sino en la gente que la habita y en los majestuosos paisajes que la adornan.

Y de manera muy especial, le agradecemos a nuestra Universidad Libre – Seccional Socorro por ser nuestra casa de formación en donde a través de sus docentes y directivos nos permitió iniciar, desarrollar y culminar nuestro proceso para obtener el anhelado título de “Magister en Derecho Administrativo”.

Mónica Alexandra & Diana Patricia.

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO I: RÉGIMEN JURÍDICO DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO.....	17
1.1 Contextualización dogmática.....	17
1.2 Fundamento constitucional.....	17
1.3 Elementos.....	18
1.3.1 Daño antijurídico.....	18
1.3.2 La Imputación al Estado.....	19
1.3.3 El nexo causal.....	19
1.4 Títulos de imputación	19
1.4.1 Responsabilidad subjetiva.....	19
1.4.2 Responsabilidad objetiva	19
1.5 Causales de exoneración	20
La fuerza mayor:	20
Hecho de la víctima:.....	20
Hecho exclusivo y determinante de un tercero:	21
CAPÍTULO II: LINEAMIENTOS JURÍDICOS DE LA ACTIVIDAD MINERA: ANÁLISIS DE LA MINERÍA ANCESTRAL EN EL MUNICIPIO DE VETAS – SANTANDER.....	22
2.1 Análisis histórico.	22
2.2 Marco Constitucional.....	28
2.3. Marco Legal	28
2.4 Marco Reglamentario.	31
2.5 Marco Jurisprudencial.....	35
2.6 La actividad minera en Vetas (Santander)	36

CAPÍTULO III: LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO FRENTE A LA PROTECCIÓN QUE DEBE BRINDAR A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MINEROS ANCESTRALES DEL MUNICIPIO DE VETAS FRENTE A LA PROHIBICIÓN MINERA DE LOS PÁRAMOS..... 40

3.1 Decisiones judiciales y actos de delimitación del Páramo de Santurbán. 40

3.2 Derecho al trabajo y al mínimo vital actividad minera..... 43

3.3 Fundamento de la responsabilidad en el marco de las decisiones judiciales y actos de delimitación del Páramo de Santurbán 45

3.4 Título de imputación 46

3.5 Causales de exoneración 48

3.6 Presupuestos..... 50

3.7 Tasación de perjuicios 52

3.8 Análisis y triangulación de la información recolectada en las entrevistas realizadas a los mineros ancestrales del municipio de Vetos. 55

3.9 Postura de la Agencia Nacional de Minería y de ASOMINEROS. (Respuesta de los Derechos de Petición de solicitud de información) 70

3.10 Análisis y solución del caso sub examine por medio de la pregunta de investigación. 80

Conclusiones..... 82

Recomendaciones 84

Referencias 86

Doctrina. 86

Legislación..... 88

Jurisprudencia 91

Anexos..... 96

Anexo N° 01: Evidencia fotográfica de la actividad de observación en la empresa minera “Reina de Oro S.A.S” ubicada en la vereda el Volcán del municipio de Vetas (Santander).	96
Anexo N° 02: Radicación y respuesta de Derecho de Petición de solicitud de información presentado a ASOMINEROS.	101
Anexo N° 03: Radicación y respuesta de Derecho de Petición de solicitud de información presentado a la Agencia Nacional de Minería.	101
Anexo N° 04: Entrevistas estructuradas realizadas a los mineros ancestrales del municipio de Vetas (Santander)	101

TABLA DE GRÁFICAS

Gráfica N° 1: Identificación del género.	55
Gráfica N° 2: Rango de edad.	56
Gráfica N° 3: Identificación de las discapacidades físicas de los mineros.	57
Gráfica N° 4: Auto identificación con la comunidad minera ancestral.....	57
Gráfica N° 5: Análisis del nivel de vida de los mineros de Vetás (Santander).....	58
Gráfica N° 6: Identificación de la actividad económica más relevante en Vetás (Santander)	59
Gráfica N° 7: Identificación de las principales organizaciones de la zona y enfoque de trabajo.	59
Gráfica N° 8: Conocimiento sobre el fundamento histórico del municipio.....	60
Gráfica N° 9: Desarrollo de la actividad minera a gran, mediana y pequeña escala.	61
Gráfica N° 10: Identificación de la actividades mineras alrededor del Páramo de Santurbán.	61
Gráfica N° 11: Incidencia del fallo de la Corte Constitucional en las condiciones laborales y económicas de la población minera de Vetás (Santander).	62
Gráfica N° 12: Contextualización sobre la posibilidad de desarrollar una actividad diferente a la minería en Vetás (Santander).....	63
Gráfica N° 13: Indagación de la actividad minera como sustento económico principal en el municipio objeto de estudio.....	63
Gráfica N° 14: Contextualización de la minería como una actividad económica ancestral.	64
Gráfica N° 15: Identificación de la actividad minera como única fuente de ingresos económicos.	65
Gráfica N° 16: Análisis de los miembros de los grupos familiares que se dedican a la actividad minera.	65
Gráfica N° 17: Nivel de afectación de las fallos judiciales en los procesos de actividad minera.	66
Gráfica N° 18: Impacto de las nueva reglamentación jurídica en la actividad minera.	67
Gráfica N° 19: Identificación y conocimiento de la sentencia emitida por la Corte Constitucional.....	67

Gráfica N° 20: Impacto de los fallos judiciales en los derechos del trabajo y mínimo vital de los mineros de Vetas (Santander)	68
Gráfica N° 21: Expectativa de las condiciones futuras en el ámbito laboral por parte de los mineros.	69

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración N° 1: Línea del tiempo 1821-1873.	24
Ilustración N° 2: Línea del tiempo 1886-1988.	27

Introducción

La prohibición expresa de la actividad minera en las zonas de páramo se identifica a partir de la jurisprudencia de constitucionalidad 035 de 2016 en donde se buscó enfatizar en la protección al ecosistema natural, teniendo en cuenta la importancia debida en la garantía de los derechos al medio ambiente y el agua de los ciudadanos; resaltando además el valor estratégico para el caso en estudio respecto al Páramo de Santurbán frente al daño que se pudiere ocasionar en relación a las fuentes hídricas consideradas como un objeto de especial protección constitucional.

No obstante, es de suma importancia destacar las consecuencias ocasionadas por medio de la jurisprudencia en cita; en donde se afecta gravemente a los titulares mineros del municipio de Vetás (Santander); quienes han desarrollado la minería ancestral en las áreas circundantes al Páramo de Santurbán como su única actividad económica; destacando la importancia que tiene la minería local para el desarrollo del municipio en donde se debe tener en cuenta según estudio realizado por Buitrago (2014) que el ochenta por ciento (80%) de la población del municipio son empleados de las minas o dependen directa o indirectamente de la extracción del oro. (p 12)

De igual manera, dadas las condiciones geográficas del municipio de Vetás (Santander) no es viable la gestión de un desarrollo agrícola y frente al turismo se dificulta el acceso al municipio derivado de los problemas de infraestructura en las vías que obstaculiza recibir turistas; enfatizando de esta manera en la importancia que tiene la minería local para la población objeto de estudio ya que se encuentran frente a una latente amenaza de sus derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital.

Ahora bien, en materia de responsabilidad del Estado y en virtud de la cláusula constitucional de responsabilidad (art. 90 C.P.) el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas; en el caso objeto de estudio, al configurarse un daño con ocasión de la vulneración de derechos fundamentales e incluso de principios como la confianza legítima derivado de una decisión judicial, se tornaría aplicable la cláusula en mención. Sin embargo, la circunstancia en virtud de la cual el Páramo es considerado un bien de especial protección constitucional al proveer de agua y servicios ambientales no solo a las comunidades aledañas sino a la sociedad en general, y se plantea un interesante cuestionamiento sobre la responsabilidad pretendida y la antijuridicidad del daño ocasionado a los titulares mineros ancestrales.

Por consiguiente, por medio del proceso de investigación realizado en el trabajo de grado se ha planteado la siguiente pregunta: *¿Cuál es la responsabilidad del Estado por la vulneración de los derechos al trabajo y mínimo vital de los mineros ancestrales del municipio de Vetás (Santander) durante el periodo 2016 -2019?*; en donde se analiza de manera especial la jurisprudencia de la Corte Constitucional con ocasión al daño causado a los titulares mineros ancestrales, quienes quedaron desprovistos de su actividad laboral, de su fuente de ingreso y en una preocupante situación de vulnerabilidad económica.

En este contexto, para brindar solución a la pregunta de investigación se ha planteado como objetivo general: Determinar la responsabilidad del Estado por la vulneración de los derechos al trabajo y mínimo vital de los mineros ancestrales del municipio de Vetás (Santander) durante el periodo 2016 -2019. Así mismo, con el fin de dar cumplimiento al objetivo general se han planteado los siguientes objetivos específicos que se desarrollan por

medio de cada uno de los capítulos del presente trabajo de grado y corresponden a: I) Analizar el régimen de responsabilidad del Estado en el marco del ordenamiento jurídico colombiano. II) Identificar el sistema jurídico de la actividad minera ancestral en el Municipio de Vetas – Santander. III) Contextualizar la protección que debe brindar el Estado en relación a los derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital de los mineros ancestrales del municipio de Vetas frente a la prohibición de minería en los páramos realizada por la Corte Constitucional.

En este sentido, por medio del proceso metodológico y de sistematización de la información se examina el régimen de responsabilidad del Estado en el marco del ordenamiento jurídico Colombiano; se presenta el régimen jurídico de la actividad minera y en especial de la ancestralidad en el Municipio de Vetas – Santander; se revisan las decisiones judiciales de la Corte Constitucional y los actos de delimitación del Páramo de Santurbán que prohíben las actividades mineras; y finalmente, se analiza la vulneración de los derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital de los titulares mineros ancestrales en el Municipio de Vetas como consecuencia de la prohibición de la minera en páramo, con miras a determinar la responsabilidad del Estado.

Es por ello, que el presente proceso de investigación que se culmina por medio de la presentación del trabajo de grado posee gran justificación e importancia toda vez que en la actualidad existe una incertidumbre jurídica sobre la continuidad de la actividad minera al prohibirse su desarrollo en la zona de páramo y en consecuencia sobre la fuente de sustento de municipios como Vetas; en donde existe además, desconocimiento y preocupación por el resarcimiento de los perjuicios sufridos con ocasión de la suspensión de la actividad de explotación, la cancelación de las licencias y títulos, la terminación de los contratos de concesión, entre otros.

Resulta también útil el tema a investigar para ilustrar no solo una problemática que pareciera desconocer la decisión judicial sobre la estrecha relación entre la actividad minera y el derecho al trabajo y al mínimo vital de los titulares mineros, y la ausencia de soluciones en el corto plazo para la mitigación del daño ocasionado, máxime cuando se está adelantando un nuevo proceso de delimitación del páramo cuyo resultado tiende a disminuir el área de explotación minera, tornándola inviable.

Así mismo, resulta necesario el presente trabajo de grado teniendo en cuenta la ausencia de un desarrollo investigativo por parte de la academia sobre una problemática que cada día plantea serios interrogantes en el análisis de la responsabilidad estatal derivada de los fallos de las altas cortes con implicaciones en el campo económico de localidades pequeñas que poseen una realidad económica muy diferente a la que se analizan en el contexto jurisprudencial desde la capital del país.

Finalmente, el desarrollo metodológico de la presente investigación se enfoca en un paradigma socio – jurídico, de tipo mixto en donde se utilizaron fuentes de información primarias (Entrevistas realizadas a los titulares mineros del municipio de Vetás (Santander) y presentación de derechos de petición a ASOMINEROS y la Agencia Nacional de Minería) y fuentes secundarias contenidas en el sistema normativo constitucional, legal y jurisprudencial.

CAPÍTULO I: RÉGIMEN JURÍDICO DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO.

1.1 Contextualización dogmática.

En sus orígenes la responsabilidad del Estado se había considerado como: “una institución de origen jurisprudencial que inicia su evolución en un periodo histórico en el que imperaba el dogma de la irresponsabilidad del Estado” (Corte Constitucional, Sentencia C 832 de 2001); lo anterior, a partir de una perspectiva de protección del derecho privado y de la paulatina construcción de un modelo de Estado Social de Derecho.

No obstante, en virtud del principio de legalidad y del deber de brindar protección a la vida, la honra y los bienes de los particulares se promulgó por el inicio de las acciones reparatorias a cargo de las instituciones públicas derivado de la vulneración de los derechos fundamentales de los particulares. (Acosta & Medina, 2016)

En este sentido, se constituirá la existencia de responsabilidad del Estado en los eventos en donde se cumplan los siguientes requisitos: I) La existencia de un daño antijurídico, II) La acción u omisión debe ser imputable a una entidad pública; y finalmente (III) La existencia de un nexo de causalidad entre el daño antijurídico y el Estado. Así cumplidos los anteriores requisitos le corresponderá a la víctima una indemnización de perjuicios por los daños ocasionados de manera injusta e innecesaria.

1.2 Fundamento constitucional.

El desarrollo realizado en la Constitución Política de 1991 se encuentra enmarcado de manera principal en el siguiente articulado:

- I. Por medio del artículo 1° se ha estipulado un Estado Social de Derecho que debe brindar protección a la dignidad humana, al trabajo y debe propender por la solidaridad entre las personas que lo conforman.
- II. En el artículo 2° se identifican los fines esenciales del Estado en donde se debe garantizar la efectividad de los principios y derechos que se han establecido de manera previa en la norma constitucional.
- III. En relación al artículo 13 superior, se ha incorporado el Derecho Fundamental a la igualdad de todas las personas que gozaran protección frente a todas las autoridades públicas.
- IV. Finalmente, de manera expresa y especial por medio del artículo 90 superior se ha estipulado el principal fundamento normativo de orden constitucional por medio del cual se ha estipulado el régimen de responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables ocasionados por la acción u omisión de las autoridades públicas.

En este contexto, por medio del desarrollo legal de los postulados constitucionales se identifica el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en donde se incorpora el medio de control de reparación directa que “busca la declaratoria de responsabilidad extracontractual y la consecuente reparación del daño causado” (Ley 1437, 2011, art 140)

1.3 Elementos

1.3.1 Daño antijurídico

Se configura en los eventos en donde la producción del daño no se encuentra justificada en algún título jurídico válido y la deslegitimación de la administración pública para causar

algún tipo de daño, además de la consecuente negación por parte del administrado para tener que soportarlo. (Irisarri, 2000)

1.3.2 La Imputación al Estado.

Corresponde a una atribución jurídica que se ha de realizar en contra del Estado por medio de una autoridad pública; a quien le corresponde el deber de reparar o indemnizar por los daños antijurídicos que hubiere causado por su acción u omisión.

1.3.3 El nexos causal.

Teniendo en cuenta los dos (2) anteriores elementos, se constituye el último y tercer elemento de la responsabilidad del Estado que corresponde al nexos causal por medio del cual se ha de atribuir que el daño causado se ha de responsabilizar a una autoridad pública.

1.4 Títulos de imputación

1.4.1 Responsabilidad subjetiva

Encuentra su fundamento en la falla en el servicio que se constituye a partir de las actuaciones irregulares de la administración en donde se debe: “demostrar que la administración actuó de manera contraria a la regularidad administrativa, que lo hizo de manera ilegal contrariando postulados de buen servicio público o de la adecuada función administrativa” (Paillet, 2001, p 114)

Se trata así de una responsabilidad que se configura cuando la administración se sustrae del cumplimiento de sus obligaciones o la prestación del servicio haya sido irregular, defectuosa o se extralimite en el ejercicio de las mismas, es decir por la falla del servicio, importando la calificación de la conducta ejecutada por el agente estatal.

1.4.2 Responsabilidad objetiva

La responsabilidad objetiva se constituye cuando se ocasionan perjuicios a las personas en ejercicio de una actividad lícita estatal, generando una desigualdad frente al sistema de cargas que estas deben soportar, rompiéndose de esta manera el equilibrio de las cargas públicas por un daño especial o un riesgo excepcional, sin importar que exista o no culpa de la administración, sino la calificación del daño.

1.5 Causales de exoneración

En los casos en que se configura la responsabilidad extracontractual del Estado objetiva solamente puede exonerarse demostrando una causa extraña, la cual consiste en “el hecho irresistible y jurídicamente ajeno o exterior al Estado”. (Tamayo, 2014)

En estos eventos se han de considerar como causales de exoneración:

La fuerza mayor:

Se constituye como un hecho imprevisible e irresistible en la esfera externa del escenario jurídico del demandado y se caracteriza por: “ser exterior al objeto dañoso y a sus riesgos, imprevisible en su producción y en todo caso, irresistible”. (García, 2008)

Hecho de la víctima:

Por medio de la jurisprudencia del Consejo de Estado, se ha estipulado que el hecho de la víctima tiene consecuencias exoneratorias totales por regla general, y parciales cuando concurren en la generación del daño, las conductas del demandante y del demandado, siendo ambas determinantes, eficientes y adecuadas. Para determinar en este caso el grado de exoneración del demandado, y de participación del demandante, el juez deberá tener en cuenta “las circunstancias de cada caso, así como las pruebas obrantes en el proceso” (Rodríguez, 2012)

Hecho exclusivo y determinante de un tercero:

Esta causal requiere dos elementos para su configuración, el primero que el hecho deber ser exclusivo y determinante del tercero, ajeno al servicio; y el segundo, que además ese hecho sea imprevisible e irresistible, lo que implica que “no basta solo demostrar que el tercero participó en la realización, sino que la relación de causalidad se encuentra debidamente probada y que por ello este hecho se convierte en la causa idónea y eficiente del daño causado”. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Expediente: 25020)

Visto lo anterior, las causales de exoneración de la responsabilidad corresponden a aquellas circunstancias que impiden imputar el daño antijurídico al Estado, haciendo improcedente la declaratoria de responsabilidad, bien porque es inexistente el nexo de causalidad o porque el daño se configuró por un hecho externo, imprevisto e imprevisible.

CAPÍTULO II: LINEAMIENTOS JURÍDICOS DE LA ACTIVIDAD MINERA: ANÁLISIS DE LA MINERÍA ANCESTRAL EN EL MUNICIPIO DE VETAS – SANTANDER.

2.1 Análisis histórico.

En el ordenamiento nacional, el desarrollo de la actividad minera data su origen a partir de la mitad del siglo XVI en donde la población indígena buscaba esconder el oro que poseían ante la evidente conquista española; por medio de la cual se empezaron a descubrir las grandes minas aproximadamente en el año 1550 que ineludiblemente constituyó la explotación de metales preciosos.

No obstante, al hacer alusión de manera especial a la explotación del metal precioso correspondiente al oro, es de suma importancia destacar la regulación normativa expedida en el año 1690 por medio de la cual se incorporó un cuerpo de leyes en donde se prohibió la explotación del oro en polvo, ya que solo era permitido la explotación de oro fundido, aquilatado y sellado por la corona.

Sin embargo, la independencia traería consigo nuevas regulaciones para el ejercicio de la minería, teniendo como punto de partida la Constitución de Cúcuta de 1821 en virtud de la cual se funda la República de la Gran Colombia y se dispone sobre el territorio y sus recursos, se identifica que en este texto “el subsuelo pertenecía al Estado, que regulaba de diverso modo, la manera de explotar los yacimientos mineros”.

De conformidad con lo anterior, el subsuelo siempre pertenecía al Estado, pero la propiedad la podían adquirir los adjudicatarios de los yacimientos mineros que cumplieran con las condiciones señaladas en dichas normativas. Este régimen sufre cambios con la Ley

del 9 de junio de 1847 que consagra la primera reserva de yacimientos (principalmente de esmeralda) a favor de la nación. (Güiza & Rodríguez, 2016)

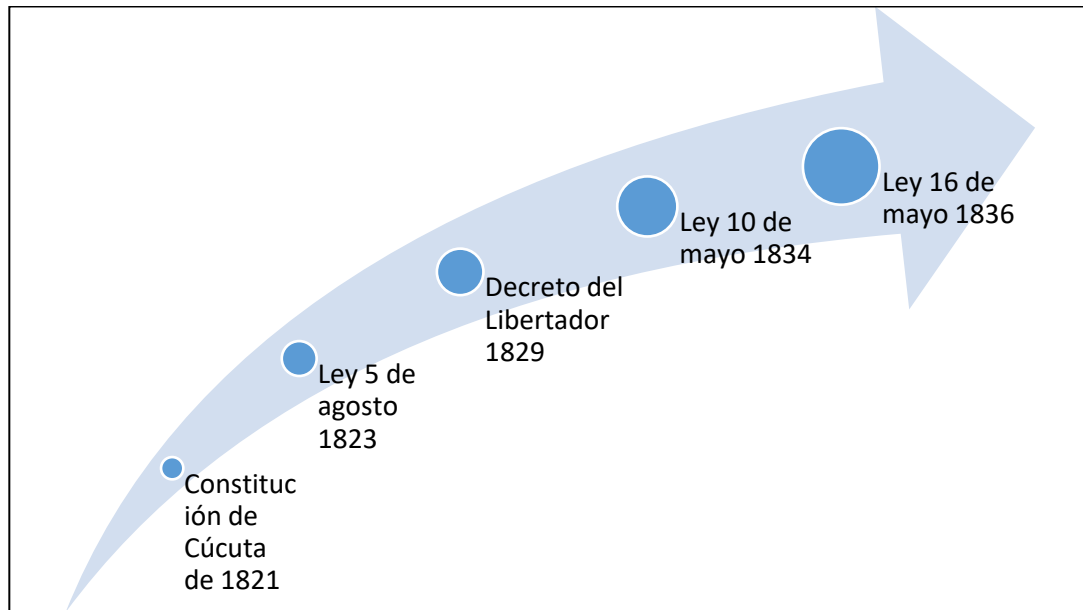
En este sentido, la Constitución de 1858 siguió este cambio y en su artículo 6 dispuso atendiendo al nuevo orden territorial que pertenecían de manera privativa a la Confederación las minas de esmeralda, sal gema y las demás a los Estados de la Confederación quienes podían expedir sus propias regulaciones para la explotación. Esto último llevó a que la mayoría de los Estados neogranadinos expidieran códigos mineros, dentro de los cuales sobresale, el Código de Antioquia que estableció el principio en virtud del cual el dueño del suelo también lo era del subsuelo.

En respuesta, se expidió en 1873 el Código Fiscal que en sus artículos 1116 y 1126 contempló la reserva de los yacimientos de petróleo, carbón y demás metales existentes en los bienes baldíos o de propiedad nacional a favor del Estado Federal, (Duarte, 2012) lo que hacía que dichas minas no se entendieran adjudicadas o vendidas con los terrenos, tornando inaplicable el principio de accesión.

Así las cosas, en esta primera etapa de la legislación minera se observa una dispersión normativa propia de los cambios de modelo de Estado de la época y un interés progresivo en nacionalizar la propiedad de los recursos minerales, pero permitiendo la participación de particulares en su explotación. También es importante resaltar la función de la minería como fuente de financiación en principio de la corona española y posteriormente del Estado colombiano y en consecuencia la flexibilización de la normatividad en la concesión de títulos de minería para promocionar esta actividad extractiva. Se trata por tanto de los inicios de una vocación minera y de su protagonismo en la economía nacional.

La siguiente imagen es ilustrativa de ello:

Ilustración N° 1: Línea del tiempo 1821-1873.



Fuente: Elaboración propia

Posteriormente, por medio de la Ley 38 de 1887 adoptó el Código de Minas del extinto Estado de Antioquia convirtiéndose así en una norma nacional cuyo artículo primero señaló “las minas de esmeralda y sal gema pertenecen a la nación; al Estado las de oro, plata, platino y cobre que podían ser adjudicadas; y a los particulares todas las demás”. Así mismo en su artículo 5 se contempló el plazo de un año para los propietarios de tierras para buscar o denunciar las minas que se encontraran en su propiedad y hacerse así titulares del derecho de dominio sobre los hallazgos, so pena que pasado dicho plazo cualquier pudiera alegar mejor derecho sobre la mina no obstante se encontrara en tierras ajenas. También en el artículo 11 se contempló que el dueño de la mina debía explotarla y pagar las regalías so pena de la extinción de su derecho.

Esta regulación implicó que el propietario de un terreno no pudiera alegar por esa razón la propiedad del subsuelo, dejando de aplicar el principio de accesión como forma de adquirir dominio sobre las minas para dar paso al sistema de ocupación como modo de adquirir la propiedad bajo el principio de *res nullius* o las minas como bien vacante. La Ley 75 de ese mismo año, concedió el derecho preferente a los dueños de minas situadas en terrenos baldíos “a que se les adjudique (...) el terreno continuo y adyacente al de las pertenencias que por la ley les corresponde, una extensión hasta de quinientas hectáreas”. (Ley 75, 1887)

Más adelante, por medio de la 21 de 1907 se autorizó al gobierno para establecer la venta exclusiva en el exterior, de platino y minerales radioactivos e hizo adjudicable el cobre; (ley 21, 1907) y mediante la ley 30 de 1903 se clasificaron los depósitos minerales como minas adjudicables en concesión en condiciones especiales y declaró “libre de derechos de importación las maquinarias (...) con destino a (...) las minas de metales preciosos”; (Ley 30, 1903) marcan el inicio de la flexibilización de la regulación para la inversión extranjera y el modelo de concesión.

En ese sentido la Ley 19 de 1909 declaró libre de derechos de exportación los metales extraídos de las minas del país en terrenos de cualquier dominio; también el Decreto-Ley 223 de 1932 reafirmó la obligación de explotar las minas por parte de sus titulares y contempló la obligación de celebrar contratos para las minas ubicadas en los lechos de los ríos navegables. A su turno la Ley 13 de 1937 constituyó la reserva a favor de la Nación de la propiedad de las minas de aluvión de metales preciosos ubicadas en las riberas de los ríos navegables; autorizó la prospección, exploración y explotación de minas en todo el territorio de la República con sujeción a las disposiciones legales que regulan la materia y el pago de

una indemnización a favor de los dueños y cultivadores de los terrenos cultivados o destinados a la cría o ceba de ganados de forma permanente en donde vaya a ejercerse la actividad minera, quienes tenían vedado oponerse.

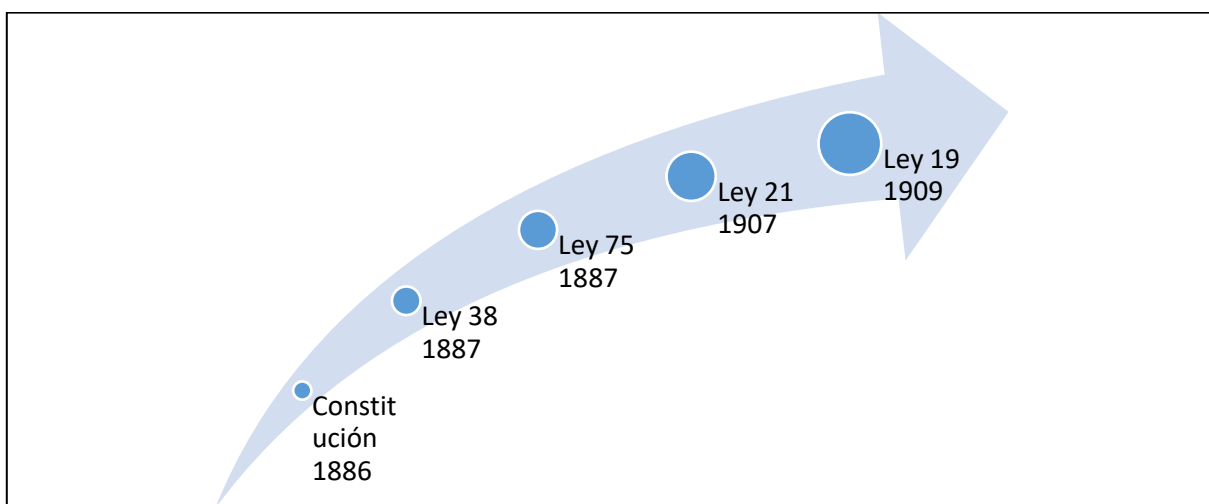
Adicionalmente esta Ley señaló la necesidad de reorganizar la Dirección General de Minas del Ministerio de Industrias y Trabajo, a fin de dotar al país de una dependencia que esté capacitada y disponga de los medios adecuados para atender eficientemente las conveniencias, necesidades, ejercicio, desarrollo, fomento y defensa de la industria minera en el país; lo que llevó a la expedición del decreto 968 de 1940 que crea el Ministerio de Minas y Petróleo.

Para el cierre de la primera parte del siglo XX los Decretos 686 de 1942, 81 de 1946 y 10 de 1950 condensaron el retroceso de la administración de los recursos mineros por parte del Estado y el privilegio a la iniciativa privada foránea mediante las concesiones. Ante este panorama, por medio la Ley 20 de 1969 buscó nacionalizar el recurso minero al establecer de manera categórica que “todas las minas pertenecen a la Nación, sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros”. (Ley 20, 1969)

Ahora bien, en la recta final de la legislación minera anterior a la Constitución de 1991 y la normativa actual, sobresale el Decreto 2655 de 1988 o “Código de Minas” en el cual se definió la naturaleza y contenido del derecho a explorar y explotar. El Código distinguió la exploración y la explotación minera atendiendo a su magnitud y tecnificación, y clasificó en tres tipos: pequeña, mediana y gran minería teniendo como referencia “el volumen o tonelaje de materiales útiles y estériles extraídos de la mina durante un determinado período de tiempo”. (Decreto 2655, 1988, art 15)

En síntesis, desde la Constitución de 1886 y hasta el Código Minero de 1988 la regulación de la actividad minera buscó resolver el conflicto entre la propiedad pública y privada de los recursos mineros y entre la minería extranjera, usualmente de gran escala, y la minería nacional, frecuentemente de pequeña escala como motor de desarrollo económico y por tanto como beneficiario del apoyo estatal. Así mismo en este periodo se dio paso a tres modelos: de concesión (1919-1956) y de nacionalización (1969-1987) y mixto (1988-1990) como muestra de la aspiración hacia una gobernanza minera y su consolidación en la dinámica económica. La imagen que sigue es ilustrativa de ello:

Ilustración N° 2: Línea del tiempo 1886-1988.



Fuente: Elaboración propia

Visto lo anterior queda claro que históricamente la minería ha hecho parte de la vocación productiva del país, consolidando una tradición minera en los diferentes territorios y configurando su estructura económica en función de la actividad extractiva. Igualmente, que ha jugado un papel protagónico en la construcción del Estado colombiano y que independiente al modelo perseguido siempre ha propiciado la participación de particulares mediante la concesión de títulos y derechos de explotación.

La Constitución de 1991 de corte neoliberal daría paso al modelo de enclave exportador y a una profunda reestructuración de las instituciones que administraban la política minera del Estado, donde éste reduciría su papel como agente económico retornando a su función reguladora, como se verá en líneas siguientes.

2.2 Marco Constitucional.

El Constituyente de 1991 buscó revertir la marcada tendencia de la economía cerrada y protegida que la Constitución anterior había generado y que trajo como consecuencia el aislamiento de la producción nacional frente a la competencia internacional. Asimismo, le apostó a una estrategia de ajuste neoliberal, siguiendo los postulados del Consenso de Washington en cuanto al modelo económico-extractivo, inserto ahora en las lógicas de mercado, para ello contempló el sector de la minería y de petróleo como objeto de desarrollo, a través de normas concernientes a la propiedad estatal del subsuelo y a la explotación de los recursos naturales no renovables.

Se observa también que la Constitución armoniza las actividades económicas y la protección del ambiente, sin prescindir de alguna de ellas, o preferir a una sobre la otra, que perjudique derechos adquiridos o expectativas legítimas. Adicionalmente es claro que la actividad minera encuentra sustento constitucional y protección para su ejercicio como fuente de desarrollo económico en virtud de los derechos a la libertad de empresa, de competencia económica, la autonomía de la voluntad privada y principalmente el derecho al trabajo.

2.3. Marco Legal

Acorde con la normativa constitucional, el desarrollo legislativo de la minería ha promovido el fomento de la industria y la formalización de la explotación artesanal,

condensadas en el actual código de minas-Ley 685 de 2001. Antes de su expedición, las normas buscaron, entre otros objetivos, normalizar las situaciones configuradas en vigencia de la Constitución de 1886, regular algunos de los vacíos jurídicos de antaño y ahondar en el componente ambiental.

En donde se han de identificar los siguientes postulados principales:

- I. En primer lugar, por medio de la Ley 97 de 1993 se reconoció la “propiedad privada” en los hidrocarburos que ampara los derechos adquiridos por medio de un título específico de adjudicación o por una sentencia definitiva frente a la explotación de los yacimientos de hidrocarburos o metales con antelación al 22 de diciembre de 1969.
- II. Después, por medio de la Ley 99 de 1993 se estipuló la licencia ambiental como un requisito previo para la realización de actividades de exploración y explotación.
- III. No obstante, es de suma importancia citar el Decreto 2655 de 1988 correspondiente al antiguo código de minas en donde la licencia ambiental se entendía implícita al título minero y como “la autorización para utilizar en los trabajos y obras de minería, los recursos naturales renovables y del medio ambiente, en la medida en que sean imprescindibles para dicha industria, con la obligación correlativa de conservarlos o restaurarlos si ello es factible, técnica y económicamente”. (Decreto 2655, 1988, art 246)
- IV. Posteriormente, por medio de la Ley 141 de 1994 se estipuló para los casos de las explotaciones mineras pequeñas la obligación de legalizar dicha explotación en un plazo no mayor de un año, enviando la solicitud de licencia, permiso o

contrato para la explotación de minas a la autoridad competente. (Ley 141, 1994, art 58)

- V. Hasta este punto las normas citadas abordaban algunos aspectos necesarios para el desarrollo de la actividad minera a la luz de la Constitución, pero no expresaban las aspiraciones del gobierno para el crecimiento de esta industria. Por tanto, se expide el documento CONPES 2898 de 1997 que definió las perspectivas de la industria minera colombiana.

Sin embargo, en la actualidad se identifica la Ley 685 de 2001 actual “Código de Minas” se expidió atendiendo a tal recomendación, y buscó estipular las normas que permiten desarrollar proyectos mineros en armonía con el medio ambiente; siendo enfático en crear las condiciones necesarias para el impulso de la industria minera, así como el crecimiento y formalización de la mediana y pequeña minería, en aras del desarrollo regional y como una fuente accesible de financiamiento. En consecuencia, doto de legitimidad el desarrollo de la minería tradicional, fomentando la titularización y la vocación extractiva de territorios.

Para el caso sub examine; el Ministerio de Ambiente y desarrollo territorial mediante resolución 2090 de 2014 delimitó el Páramo de Santurbán, y con ello redujo la zona de explotación minera, afectando los títulos de minería concedidos, principalmente de las medianas y pequeñas empresas locales que allí trabajaban. Por ello sería declarada inexecutable debido a la inexistencia de consulta y participación con las comunidades, ordenándose una nueva delimitación.

En el Plan Minero se advirtió sobre referentes de la minería artesanal desde épocas precolombinas, y el rol determinante que juega en la industria de hidrocarburos, como subsector. También las fallas de los anteriores programas de legalización de minería que ha

perjudicado el impulso de esta actividad y su consolidación, no obstante, la notable importancia de la MAPE en las economías locales. Para ello contempló como estrategias “impulsar el desarrollo de instrumentos de financiamiento para minería de pequeña y mediana escala de producción y diseñar procedimientos breves que permitan acceso a títulos mineros a los miembros de la MAPE”. (Plan Nacional de Desarrollo Minero al 2014, 2012)

Se deduce de lo expuesto que el Plan de Desarrollo y los instrumentos de planeación minera comparten el ideal de país minero y, por tanto, de formalización, tecnificación y mejoramiento como motor de impulso local de la pequeña minería. A su vez es claro que la teleología del legislador se dirigió hacia una mayor estabilidad jurídica a la vez que la incorporación como actores relevantes a los medianos y pequeños mineros lo que ha producido un inusitado aumento del número y la extensión de títulos para explotación minera a lo largo del país.

Así las cosas, con la Constitución Política de 1991, el Código Minero, y demás leyes señaladas con anterioridad, se buscó fomentar, acrecentar y consolidar la actividad minera como motor de desarrollo económico nacional, regional y local, desde estrategias como el fortalecimiento y formalización del subsector de la minería tradicional, dotando de seguridad jurídica la explotación minera y su utilización como fuente lícita de generación de ingresos. También se pretendió un sector minero organizado, legítimo, incluyente y competitivo, generador de desarrollo tanto a nivel regional como nacional con una institucionalidad minera eficiente y fortalecida sin afectar las garantías constitucionales de los ciudadanos.

2.4 Marco Reglamentario.

Junto con el avance legislativo, la reglamentación de la minería en el ámbito nacional fue desarrollándose los siguientes:

- I. Decreto 2636 de 1994 en donde se definieron a los explotadores mineros de hecho como “las personas que, sin título minero vigente, lleven a cabo explotaciones de depósitos y yacimientos mineros”. (Decreto 2636, 1994, art 1°)
- II. El Decreto 501 de 1995 por su parte, reglamentó la inscripción en el registro minero de los títulos para la exploración y explotación de minerales de propiedad nacional, exigiendo para ello la licencia ambiental respectiva.
- III. El Decreto 2390 de 2002 reglamentario del artículo 165 del Código de Minas, determinó el procedimiento a que se someterían los explotadores de minas de propiedad estatal sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional. A la luz de los anteriores decretos los explotadores mineros de hecho que eran aquellos que adelantaban la actividad minera sin título, y que para su legalización debían obtener el título minero, previo el otorgamiento de la licencia ambiental, garantizar la seguridad y los requerimientos medioambientales, inscribirse en el registro minero nacional y obtener la autorización de la autoridad competente.
- IV. El Decreto 2191 de 2003 adopta el glosario técnico minero en el cual se dispone que las explotaciones tradicionales son aquellas áreas en las cuales hay yacimientos de minerales explotados tradicionalmente por numerosas personas vecinas del lugar y que, por sus características y ubicación socioeconómica, sean la única fuente de abastecimiento regional de los minerales extraídos.

- V. A su vez, el Decreto 1631 de 2006 regula en los casos excepcionales de propietarios privados del subsuelo, inscritos en el Registro Minero Nacional, la obligación de pago al Estado por la explotación de metales preciosos, correspondiente al 0.4% de regalías sobre el valor de la producción calculado o medido en boca o borde de mina.
- VI. El Decreto 4134 de 2011 por el cual se crea la Agencia Nacional de Minería con el fin de buscar mayor eficiencia en la administración del recurso minero.
- VII. El Decreto 1970 de 2012 se le asigna a la autoridad minera adelantar el trámite de legalización de la actividad minera ejecutada por los explotadores, grupos y asociaciones, que acrediten ser mineros tradicionales y que exploten minas de propiedad estatal sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional.
(Decreto 1970, 2012, art 1°)

Se observa con estos decretos la decisión del Estado de fomentar y legalizar la minería tradicional, generando las condiciones necesarias para la sostenibilidad de esta actividad económica y como apuesta para el desarrollo de los territorios.

- VIII. Ahora bien, el Decreto 933 de 2013 adoptó medidas para la formalización de la minería tradicional, entre ellas la definición de esta actividad como:(...) aquella que se ha ejercido desde antes de la vigencia de la Ley 685 de 2001, en un área específica en forma continua o discontinua, por personas naturales o grupos de personas naturales o asociaciones sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional, en yacimientos minerales de propiedad del Estado y que, por las características socioeconómicas de estas y la ubicación del yacimiento, constituyen para dichas comunidades la principal fuente de manutención y

generación de ingresos, además de considerarse una fuente de abastecimiento regional de los minerales extraídos. (...) (Decreto 933, 2013, art 1°)

- IX. El Decreto 480 del 2014, reglamentó el subcontrato de formalización minera como una herramienta que regula las condiciones para celebrar subcontratos de formalización entre los titulares mineros y los explotadores mineros de pequeña escala. (Decreto 480, 2014, art 1°)
- X. Por último, el Decreto número 1073 de 2015 reglamentó el Sector Administrativo de Minas y Energía, recopilando los decretos preexistentes, y en materia de minería dispuso el catastro minero como el sistema de radicación de la Agencia Nacional de Minería en el que se registran “la propuesta de contrato de concesión, de legalización o de autorización temporal”. (Decreto número 1073, 2015, art. 2.2.5.1.2.1)
- XI. Asimismo, dispuso en el capítulo 4 la formalización de los mineros tradicionales ubicados en un área cubierta por un título minero, siempre que el beneficiario del título esté interesado en participar, podrá darse a través de una cesión parcial de área a favor del minero tradicional o de la renuncia parcial del área en procura del proceso de formalización o, de la suscripción de contratos de operación o asociación con el minero tradicional (art. 2.2.5.4.1.1.3.). Además, sobre el subcontrato de formalización minera señaló las condiciones y requisitos para la celebración y ejecución, por parte del titular minero con aquellos explotadores mineros de pequeña escala o pequeños mineros (art. Artículo 2.2.5.4.2.1). También contempló la legalización minera y definió como explotadores de minas de propiedad estatal sin título a las personas que, sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional, llevan a cabo

explotaciones de depósitos y/o yacimientos mineros, con anterioridad al 17 de agosto de 2001(art. 2.2.5.5.1.1).

El anterior desarrollo reglamentario da cuenta de una estrategia estatal de impulso a la formalización de la pequeña, tradicional e informal minería, como actividad legal, motor del crecimiento económico local y de desarrollo regional, que ha representado para las comunidades mineras, la confianza de que la minería puede realizarse tranquilamente debido al respaldo normativo y la institucionalidad que ha promulgado y existe. De igual forma, se deduce un modelo minero garantista para la explotación y la comercialización del recurso natural en el marco de un ordenamiento jurídico especial.

2.5 Marco Jurisprudencial

Para la Corte Constitucional es de suma importancia el reconocimiento de la actividad minera y su relación con los derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital, así como la protección que el ordenamiento jurídico ha contemplado para la minería y su aporte al desarrollo del país. Al tiempo el énfasis sobre la tradición de la minera como fuente de financiamiento del Estado y particulares. Por lo cual debe la administración buscar medidas alternativas tendientes a disminuir o atenuar los efectos de decisiones que limiten la minería, so pena de vulnerar derechos fundamentales. De lo que se trata precisamente es de proteger al particular de los cambios inesperados y bruscos efectuados por las autoridades, como sucedió en el caso analizado por la Corte donde un trabajador informal, sujeto de especial protección constitucional, que ejerció la actividad minera, como único medio de sustento económico, con anuencia de las autoridades por 10 años o más y que de un momento a otro se ve interrumpida su actividad por una decisión de la Administración de recuperar el ambiente.

Como se observa la jurisprudencia constitucional ha reconocido en la actividad minera los principios constitucionales de libertad de empresa e iniciativa privada y su ejercicio como fuente de trabajo y fomento de la economía constitutiva en determinados casos de expectativas legítimas y de la obligación de intervención del Estado. Así mismo, ha considerado ajustado a la Constitución la formalización de la minera tradicional y la adopción de medidas por parte del gobierno para fomentar la explotación minera, en armonía con el medio ambiente.

Sin embargo, y como se verá más adelante la Corte Constitucional ha virado su posición hacia una mayor protección del medio ambiente y en consecuencia hacia la limitación de la actividad minera, y en casos como el Páramo de Santurbán, su prohibición. Esta circunstancia ha afectado a poblaciones e incluso municipios, como Vetas, en Santander, cuya vocación tradicional ha sido la minería.

2.6 La actividad minera en Vetas (Santander)

La actividad minera inicia en el municipio con los franceses que trabajaron en la vereda El Chopo, mina que dejaron abandonada a finales de la primera Guerra mundial. Luego con la llegada de los alemanes al municipio a finales siglo XIX y comienzos del XX se reactiva la explotación del recurso en las minas “La tosca” y “la Reina de Oro” siendo la fuente de trabajo para los vetanos; posteriormente la bonanza causada y el aprendizaje del oficio, rápidamente conllevan a la compra de dichas minas por parte de los pobladores y al auge de la minería artesanal.

En este auge empiezan a conformarse las primeras empresas mineras locales, algunas de las cuales aún subsisten y la minería se convierte en una actividad propia de los vetanos.

Las empresas paulatinamente fueron dotando de equipamientos de tecnología y de seguridad. Para la década de los 90 se aumentan las actividades mineras complementarias como barequeo y galafardeo, y crece la economía local.

En 1997 inicia el proyecto Río Suratá que se desarrolla en Vetas y que buscó tecnificar la explotación de minerales adelantada por las empresas locales para reducir la contaminación del río Suratá por cianuro y mercurio. Su impacto estuvo dado por la transformación de la minera artesanal en el municipio a través del mejoramiento de la tecnología y los métodos de explotación, en un intento por no desestimar o prohibir la actividad minera pero sí controlar su impacto ambiental. Continúo hasta el 2008 pero sin cumplirse a cabalidad. Para ese año, que coincide con el impulso del gobierno a la locomotora minera llegan empresas multinacionales de explotación minera al municipio, con la intención de desarrollar esta actividad a gran escala, y para ello obtienen la mayoría de títulos mineros, hacen compras de minas artesanales y de predios en las zonas. Debido a ello las empresas locales de minería artesanal se reducen, sus trabajadores se trasladan a las compañías extranjeras y las medidas de control ambiental aumentan excediendo las posibilidades reales de las pequeñas empresas.

Aunado a ello surge la intención del gobierno nacional de limitar las áreas de explotación minera tradicionalmente utilizadas (como las zonas de páramo) y se hace más intensa la intervención judicial de la Corte Constitucional en el ejercicio de la minería desde la evaluación de sus impactos ambientales. De igual forma, las labores de producción, han dependido de las relaciones y los espacios de la actividad minera, por lo que la mayoría de su población económicamente activa ha estado situada:

En palabras de Contreras es una actividad generacional:

“Ser minero es la vocación que ha tenido una persona toda la vida desde su historia y su nacimiento, acá ser minero comienza a los cinco años de edad para los hombres. Los papás van enseñándole a sus hijos la actividad que han hecho por generaciones. empezando lo traen a uno al socavón y le van enseñando las cosas paulatinas que hace el minero, lavar en batea, hacer los primeros pinitos de lo que ellos hablan de donde se consigue la comida para llevar a la casa a cada una de las familias”. (Contreras, 2015)

Esta minería artesanal se ha desarrollado de manera legal y con los títulos mineros y licencias ambientales exigidos, por lo que no se ha asociado con lo ilegal sino con una forma propia de producción. Aún más, para los vetanos la relación entre el oro y el agua, y en general con el páramo ha sido distinta. En vez de oponerse agua y oro, estos recursos se complementan, permitiendo la actividad minera que ancestralmente han desarrollado.

La alcaldía de Vetás estima que alrededor del 51% de las personas del municipio tienen como labor el trabajo en las minas, en donde sobresalen: La Providencia, Minera La Elsy, Potosí, Trompetero, La Peter, La Democracia, Real Minero (La Botella), Tajo Abierto, El Raco, San Antonio, Morrorueda, La Tosca y Reina de Oro. Éstas últimas, por ejemplo, tienen registros de actividades desde la época de la colonia, de las cuales salieron al mercado muchos castellanos de oro y en las cuales se introdujo por primera vez el molino californiano el alemán Henry Stenker.

Actualmente, la actividad minera se encuentra suspendida en el páramo de Santurbán con ocasión de la sentencia C-035 de 2016 la Corte Constitucional declaró inexecutable la autorización para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables al interior

del área delimitada como páramo y por la Ley 1930 de 2018 que prohíbe el desarrollo de actividades de exploración y explotación minera en los Páramos.

Por ello, la economía local municipal afectada con altos índices de desocupación y desempleo, así como el cierre o venta de las pequeñas empresas mineras, lo que en últimas vulnera los derechos al trabajo y al mínimo vital de esta población.

CAPÍTULO III: LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PROTECCIÓN QUE DEBE BRINDAR A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MINEROS ANCESTRALES DEL MUNICIPIO DE VETAS FRENTE A LA PROHIBICIÓN DE LA MINERÍA EN LOS PÁRAMOS.

3.1 Decisiones judiciales y actos de delimitación del Páramo de Santurbán.

En Colombia, históricamente el modelo económico orientado en la extracción de minerales e hidrocarburos como sectores que representan importantes recursos económicos para el Estado, han generado en el territorio, complejas problemáticas sociales, económicas, políticas, culturales, etc., que afectan principalmente los derechos de las comunidades que han subsistido por generaciones de la extracción artesanal de esos recursos naturales, como es el caso de la población minera ubicada en el municipio de Vetás (Santander), área de influencia del páramo de Santurbán. En este contexto, se ha requerido la intervención y pronunciamientos de las Altas Cortes, principalmente la Constitucional que en su jurisprudencia ha decidido sobre su delimitación y acciones para evitar impactos ambientales, entre otros aspectos.

Ahora bien, antes de entrar a analizar los pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto a la delimitación del páramo de Santurbán, es importante revisar algunos aspectos relevantes de la Resolución No. 2090 del 19 de diciembre de 2014 proferida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la cual se delimita el Páramo Jurisdicciones – Santurbán –Berlín, y se adopta otras determinaciones.

- I. En primer lugar, su expedición se fundamentó en la ley 1450 de 2011 en donde se prohibió adelantar actividades agropecuarias, exploración y explotación de

hidrocarburos y minerales en los ecosistemas de páramos y ordenó la delimitación de los páramos por parte del Ministerio de Ambiente con base en los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales elaborados por las autoridades regionales ambientales.

- II. En segundo lugar, estableció que de las 142.000 hectáreas de extensión del páramo de Santurbán serían delimitadas 98.994 hectáreas, equivalentes al 76% lo que significaba su exclusión de la explotación minera.

Así mismo, contempló el proceso de ordenamiento del Páramo de Santurbán en el artículo 3, definiendo tres áreas o zonas así:

- a) **Zonas de preservación:** Corresponde a las áreas que por sus condiciones naturales y su fragilidad ecológica se deben mantener protegidas por la transformación de estructuras naturales derivadas de las intervenciones humanas.
- b) **Zonas de Restauración:** Se deben incorporar las áreas que han sufrido alternaciones naturales y deben ser restauradas para mejorar los servicios eco sistémicos del páramo.
- c) **Zonas de Uso Sostenible:** Se incorporan las áreas que por sus características deben ser manejadas según las actividades productivas que aportan al flujo de los servicios eco sistémicos.

De igual manera, por medio del artículo 9° de la Resolución No. 2090 se estableció la diferenciación de áreas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente y la prohibición de “celebrar contratos de concesión minera u otorgar títulos mineros o licencias ambientales que autoricen el desarrollo de actividades mineras”. (Resolución 2090, 2014, art 9°)

No obstante, lo anterior en las zonas identificadas como “Áreas para la restauración del ecosistema de páramo”, territorios que se encuentren ubicadas en los municipios tradicionalmente mineros como: Vetas, California y Suratá, la citada Resolución dispuso que se podrían autorizar y adelantar actividades mineras, sujetas al cumplimiento de las normas mineras y ambientales que rigen la materia., garantizando con esto la posibilidad de seguir ejerciendo sus actividades ancestrales y artesanales a cientos de familias que generan sus ingresos económicos con estas actividades de minería.

En síntesis, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2090 de 2014, podrán continuar con el desarrollo de la actividad minera en las zonas de restauración, las Empresas que hayan obtenido sus títulos mineros antes del 9 de febrero de 2010, y que cuenten con licencia ambiental o instrumento de control y manejo ambiental.

Ahora bien, sería hasta el pronunciamiento de la Corte Constitucional mediante sentencia C- 035 de 2016, donde se empezaría a dar un giro histórico en materia de protección de los páramos de Colombia, puesto que desde esta jurisprudencia se habría planteado un camino de aplicación claro para la preservación de estos ecosistemas estratégicos.

En resumen, la sentencia C-035 de 2016 permite exponer diferentes argumentos por parte de la Corte Constitucional colombiana, frente a la prohibición del desarrollo de la minería en páramos, entre ellos el páramo de Santurbán. No obstante, afecta la situación para las comunidades de municipios cercanos al páramo y a los yacimientos de minerales como el municipio de Vetas, Santander, cuya decisión no es favorable a su economía, la cual se ha visto afectada en la medida en que la fuente principal de ingresos y de generación de empleo es la minería y en la actualidad no puede desarrollarse, además que el Estado no ha tomado medidas de contingencia que permitan fomentar otras fuentes de empleo.

Por otra parte, a nivel departamental, el Tribunal Administrativo de Santander mediante Auto del 30 de julio de 2018, incorpora el segundo informe de cumplimiento de la sentencia T 361 de 2017 y realiza diferentes requerimientos al Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Los accionantes el Comité para la defensa del Páramo de Santurbán, señalan enfáticamente respecto a diferentes fallas por parte del Ministerio de Ambiente, en el incumplimiento de la sentencia T 361 de 2017, tales como:” i) fallas de información, referidas a la comunicación con comunidad sobre áreas de delimitación, ii) de participación, no se definen lugares permanentes de reunión, no se convocan autoridades municipales, comunidad en general, la metodología no es clara, iii) de coordinación, injerencia de proyectos agrícolas del ICA y SENA en áreas del páramo riesgo ambiental. iv) de planeación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial no cuenta con información para programas de reconvención o sustitución labores de residentes”.

Para finalizar, es importante destacar que en la actualidad se han presentado diferentes impactos producidos en materia ambiental, social, económica y política en los municipios y áreas de influencia de Santurbán, como es el municipio de Vetás, respecto de los diferentes fallos de la Corte Constitucional en la delimitación el páramo de Santurbán como la sentencia T-361 de 2017, es importante señalar que con los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional, se ha marcado una pauta jurídica sobre cómo debe ser la intervención de las comunidades en estos procesos, el respeto por sus formas de subsistencia, así como la necesidad de promover la capacitación y el diálogo abierto sobre minería con autoridades locales y otras ramas del poder departamental y nacional.

3.2 Derecho al trabajo y al mínimo vital actividad minera

El derecho al trabajo se contempla tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como en la Convención Interamericana de Derecho Humanos. Se ha definido como “la facultad que tiene toda persona de emplear su fuerza de trabajo en una ocupación lícita por medio de la cual pueda adquirir los medios necesarios para vivir ella y su familia decorosamente” (Corte Constitucional, Sentencia T 475 de 1992); por ello se traduce en la consecución de empleo u oficio y a que no se impida trabajar.

Es notorio de la regulación constitucional precedente y el lugar esencial que ocupa en el ordenamiento jurídico colombiano el derecho al trabajo y la importancia atribuida por el constituyente a la garantía de su ejercicio y su inviolabilidad por el mercado y el Estado.

Ahora bien, el derecho al mínimo vital, intrínsecamente relacionado con el derecho al trabajo, refiere “a contar con los recursos mínimos para poder gozar las personas del resto de sus derechos y libertades” (Rosales, 2018). Es considerado un mecanismo de igualdad social al permitir al individuo desarrollar un proyecto de vida igual que al común de la sociedad; y a su vez es una medida de justicia social, propia de un Estado Constitucional. Se sustenta en la premisa según la cual “los individuos para disfrutar plenamente su libertad, requieren un mínimo de seguridad económica y de satisfacción de necesidades básicas” (Quesada, 1997), que en el caso de los trabajadores proviene de su salario y de los empresarios de sus utilidades.

Se observa de estas sentencias que detrás de la actividad extractiva existe una economía tradicional y pequeña ejecutada por mineros arraigados en el territorio objeto de explotación, fuente de ingresos de familias y comunidades, cuyos derechos al trabajo y al mínimo vital deben ser protegidos.

Así, estos dos derechos cobran importancia al momento de analizar la prohibición de exploración y explotación por parte de los mineros tradicionales del municipio de Vetas en el páramo de Santurbán, pues son los directamente afectados con los actos y decisiones de delimitación señalados en el acápite anterior.

3.3 Fundamento de la responsabilidad en el marco de las decisiones judiciales y actos de delimitación del Páramo de Santurbán

Se señaló que la responsabilidad patrimonial del Estado se encuentra regulada en el artículo 90 constitucional, en virtud del cual, es el daño antijurídico su fundamento. Este daño en palabras de Tamayo (2014) “es aquel que el Estado no tiene derecho a causar. Ese derecho a dañar, en algunas hipótesis, deja de existir si el Estado actúa con falla o culpa. En otras ese derecho de dañar nunca existe” (p. 72), lo que significa que en algunos casos el particular tiene la obligación de soportar el daño, a menos que haya una falla en el servicio, mientras que en otros esa obligación no existe, así el Estado no incurra en falla alguna.

Este daño no se refiere a la culpa o la falla como elemento de responsabilidad, pues no es un daño culposo sino antijurídico, que en virtud de la ley debe ser indemnizado.

En el marco de las decisiones judiciales y actos de delimitación del Páramo de Santurbán, señaladas en el título precedente, se esboza una circunstancia en la que se puede ocasionar un daño antijurídico al minero tradicional, cuando se prohíbe sin aliciente alguno la actividad extractiva; en efecto, el daño antijurídico se configura con el ‘sacrificio’ de los derechos del minero tradicional al trabajo y al mínimo vital con la imposibilidad de explotar el recurso natural debido a la decisión de la autoridad de prohibir tal actividad, no obstante de contar con los títulos mineros y requisitos exigidos por la ley que le han autorizado a

trabajar y su realización ancestral. Así mismo, se presenta con ocasión de la imposibilidad de acudir a la jurisdicción, habida cuenta de que las decisiones y actos de delimitación son legales.

Significa lo anterior, que la actuación de la Administración en el supuesto mencionado, es lo que ocasiona el daño antijurídico al minero tradicional, pues lo obliga a soportar el sacrificio del derecho al trabajo, la imposibilidad de explotación del recurso, la ineficacia de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para pretender su nulidad, y la afectación a su mínimo vital.

Así, el titular minero soporta una carga desmesurada por la afectación del contrato de concesión minera válidamente celebrado y otorgado, con las decisiones judiciales y actos de delimitación del Páramo de Santurbán.

Ahora bien, este daño antijurídico es imputable al Estado en la medida en que, como se vio en los capítulos precedentes, a raíz de la expedición del acto administrativo se está creando una situación no sólo desfavorable para el titular minero, al vulnerar sus derechos al trabajo y al mínimo vital sino que se está generando un quebrantamiento efectivo del principio de igualdad ante las cargas públicas, en la medida en que entraña un daño anormal como consecuencia del ejercicio lícito de la Administración realizada en favor del interés general. (Roldan, 2017)

Así mismo, la imposibilidad de llevar a cabo las actividades mineras y la insuficiencia de las medidas que compensen la pérdida de los derechos adquiridos por parte del titular minero, lesionan su patrimonio de manera desproporcional e injusta.

3.4 Título de imputación

Si bien, la decisión de delimitación y prohibición estudiada, constituye una actuación legítima del Estado, no significa que ésta no pueda generarle al administrado unos perjuicios que no está en deber de tolerar, como es la afectación al valor patrimonial del derecho a explorar y explotar surgido a raíz del contrato de concesión minera. Lo anterior ocurre pues dicho acto es un acto que, aunque se desarrolla en beneficio del interés público, al pretender la protección y conservación de los ecosistemas de páramo por su importancia para el medio ambiente, genera un daño antijurídico al titular minero, cuando esa delimitación incide de manera directa en el área originalmente concedida en el título.

Dentro del mencionado régimen de daño especial como título de imputación de responsabilidad objetiva del Estado, de acuerdo con sus principales características se encuentra la responsabilidad del Estado por acto administrativo legal. Este tipo específico surge como consecuencia de que, si bien la Administración, expide un acto legal no está exenta de producir efectos antijurídicos.

De lo anterior se desprende que si bien las diferentes manifestaciones de la función administrativa y judicial, pueden estar en compás con el principio de legalidad, también lo es que puede generar un rompimiento del principio de igualdad de las cargas públicas; por lo cual se puede deducir la obligación indemnizatoria, en aplicación de los principios de justicia y equidad pues el daño irrogado al minero tradicional del municipio de Vetas entraña una clara ruptura de las cargas públicas que normalmente debía soportar, configurándose un daño especial.

Esto por cuanto, la tradicionalidad de su actividad minera y su reconocimiento por parte del Estado con la legalización y otorgamiento de títulos mineros y contratos de concesión generaron expectativas legítimas a los mineros durante décadas y ciertamente adquirieron

derechos, que, sin concertación o compensación, fueron vulnerados con la prohibición de la minería; imponiendo la carga de soportar de manera exclusiva la lesión a su patrimonio.

Para las autoras de esta investigación, es este título, el indicado para atribuir responsabilidad patrimonial al Estado, en la medida en que el minero ve sacrificado sus derechos al trabajo y al mínimo vital y por tanto soporta una carga desproporcionada. Pudiera pensarse que la situación de posible daño ambiental y la obligación del Estado de proteger los recursos naturales, así como la legalidad de las decisiones y actos de delimitación, justificarían la carga del particular, y exoneraría de responsabilidad a la Administración. Sin embargo, dicha afirmación no es plausible debido a la afectación de los titulares mineros quienes ancestral y legal han desarrollado esta actividad económica en las áreas circundantes al páramo, como su única fuente de ingreso, y los perjuicios sufridos con ocasión de la suspensión de la actividad de explotación, la cancelación de las licencias y la terminación de los contratos de concesión, su reducción a un punto inviable de explotación.

3.5 Causales de exoneración

En el caso bajo estudio, pudiera pensarse que la consideración del Páramo como bien de especial protección constitucional al proveer de agua y servicios ambientales no solo a las comunidades aledañas sino a la sociedad en general, junto con su fragilidad justificaría la carga del particular de no realizar la actividad extractiva. Tal razonamiento es débil en su sustento, en la medida en que el reconocimiento de la situación en mención no lleva a excluir la responsabilidad del Estado, cuando el daño irrogado entraña una clara ruptura de las cargas públicas que normalmente debían soportar y la vulneración al derecho al trabajo y al mínimo vital de los titulares mineros, sin que hasta el momento se hayan formulado soluciones en el corto plazo para la mitigación del daño ocasionado.

Más aún si se tiene en cuenta que en el Municipio de Vetas, Santander, la minería es el factor ancestral y tradicional dinamizador de la economía local, teniendo en cuenta que “todo su casco urbano está dentro de la zona de páramo y se vive únicamente de la minería, al punto que de los dos mil habitantes del municipio solo 30 personas (los funcionarios públicos) no reciben recursos relacionados con la minería, 250 personas son empleadas de las minas, y el resto (que son el 75 por ciento de la población productiva) dependen directa o indirectamente de la extracción del oro” (Buitrago, 2014); y que las condiciones del municipio no permiten un desarrollo agrícola y el ecoturismo, como alternativa productiva a la minería tarda varios años en implementarse, debido a que no se cuenta con infraestructura para recibir visitantes.

Valga la pena traer a colación los testimonios de los mineros tradicionales de Vetas, en los cuales señalan que la economía y la oferta laboral dependen de las actividades mineras. Adicionalmente consideran difícil desarrollar otro tipo de actividad económica en el municipio debido a su vocación minera, las condiciones geográficas y la formación del mercado laboral local mayoritariamente en minería; y de manera unánime resaltan la minería como el legado y la herencia que sus ancestros, les dejaron y que hace parte de su identidad. Agregan que no se han planteado por parte del Gobierno Nacional soluciones eficaces y de corto plazo a la desprotección de sus derechos al trabajo y al mínimo vital; tampoco se les ha compensado el daño que han sufrido con cada cambio de las condiciones de explotación minera.

Por tanto, la carga desproporcionada que asumen, traducida en la vulneración a i) la tradicionalidad de su actividad y los derechos subjetivos adquiridos en cumplimiento de los requisitos legales y ambientales, ii) los derechos al trabajo y al mínimo vital por tratarse de su única fuente lícita de ingresos, iii) el derecho de acceso a la justicia por tratarse de actos

de delimitación y decisiones judiciales legales; iv) la desarticulación de las distintas entidades del Estado competentes que genera incertidumbre y dilata la delimitación y v) la deficiencia de medidas compensatorias y restaurativas a los perjudicados, los sitúa en un estado de desprotección que resulta injusto sobre el minero, pero además desigual respecto de actividades extractivistas de recursos naturales permitidas.

En consecuencia, sí se configura un rompimiento de las cargas públicas y por tanto un daño antijurídico sobre el minero, que genera la responsabilidad patrimonial del Estado y el deber de indemnizar los daños ocasionados, vía medio de control de reparación directa.

Ahora bien, no siendo esa circunstancia causal de exoneración de responsabilidad, se analizan a continuación los presupuestos finales para la configuración de la responsabilidad bajo estudio.

3.6 Presupuestos

Hasta este punto, se ha señalado que puede comprometerse la responsabilidad del Estado cuando a través de decisiones y actos legales se causa el rompimiento de las cargas públicas, por la prohibición de realización de la actividad minera en zona de páramo, al causar daño antijurídico y vulnerar los derechos al trabajo y al mínimo vital de los mineros tradicionales. Dicho daño es atribuible al Estado, de manera excepcional y por equidad, cuando al obrar de tal modo, en beneficio de la comunidad, por razón de las circunstancias de hecho en que tal actividad se desarrolla, causa al administrado un daño especial, anormal, considerable, superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos. Y, por último, es a título de daño especial, en la medida en que la afectación del particular se traduce en un rompimiento del equilibrio en las cargas públicas.

Adicionalmente y como planteamiento de esta investigación en lo que refiere al marco circunstancial, (i) la legalidad de las decisiones y actos de delimitación de la zona de explotación, (ii) la existencia de la tradicionalidad y ancestralidad de la actividad minera ejercida por el particular, (iii) el cumplimiento de los requisitos legales y ambientales de la actividad extractiva, (iv) la inexistencia de soluciones efectivas a la prohibición de la minería que garanticen el derecho al trabajo y al mínimo vital.

En el primer elemento, se hace necesario que los actos administrativos sean lícitos, en la medida en que es la privación del acceso a la justicia por esta circunstancia, la que incide en la configuración del daño. Es importante este aspecto, pues si el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no cumple con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-035 de 2016, los actos de delimitación expedidos serán ilegales, y los titulares mineros contarían con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para obtener indemnización. Así mismo, porque hasta el momento ha sido inamovible la posición de la Alta Corte sobre la prevalencia del derecho al ambiente sobre el derecho al trabajo en minería, tornando inviable el ejercicio de las acciones constitucionales; y en consecuencia aumenta la situación de desprotección.

En el segundo elemento, es imperativo que las condiciones que acompañen el ejercicio de la actividad minera y a su titular respondan a la ancestralidad y tradicionalidad, como en el caso del Municipio de Vetás, pues es este elemento el que justifica la consideración diferencial de la minera a gran escala o por parte de grandes empresas, así como su relación con los derechos al trabajo y al mínimo vital. De lo contrario se generaría el absurdo de indemnizar y generar responsabilidad estatal por la sola regulación de la actividad minera.

A este punto es importante recordar que toda el área urbana del municipio está dentro de la zona de páramo y de los dos mil habitantes del municipio solo 30 personas (los funcionarios públicos) no reciben recursos relacionados con la minería, 250 personas son empleadas de las minas, y el resto (que son el 75 por ciento de la población productiva) dependen directa o indirectamente de la extracción del oro; y que las condiciones del municipio no permiten un desarrollo productivo alternativo a la minería, que en cualquier caso tardaría varios años en implementarse, debido a que no se cuenta con elementos diferentes a los creados por la minería.

Adicionalmente, recordar que la minería se lleva a cabo en el municipio desde tiempos coloniales siendo los “filones” de los reales los primeros distritos mineros, razón por la que recibe su nombre; y que se consolida con los primigenios títulos mineros y empresas hacia finales siglo XIX y comienzos del XX, con minas como “La tosca” y “la Reina de Oro”, ésta última actualmente en funcionamiento.

En el tercer elemento, el titular minero debe estar en regla en el cumplimiento de sus obligaciones legales especialmente en el tema ambiental para el ejercicio de la actividad extractiva, y por tanto configurado su derecho para adelantar la explotación; En el cuarto elemento, debe presentarse la omisión de la Administración de implementar medidas para conjurar los perjuicios causados por la prohibición de realizar minería, siendo esta la fuente de ingresos.

3.7 Tasación de perjuicios

Para el caso en estudio, los perjuicios a liquidarse en el marco de la responsabilidad estatal tratada podrán ser el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral.

En el primer caso, se encuentra representado por las sumas de dinero que salen del patrimonio del minero para atender las consecuencias nocivas de las decisiones y actos de delimitación; y por el detrimento del patrimonio representado en la diferencia entre el valor del patrimonio actual del titular minero y aquel que tenía antes de las decisiones y actos de delimitación, respecto del valor comercial del título. Deberá indemnizarse en las tres etapas del contrato de concesión minera, por ejemplo: el cambio y/o desmonte de la infraestructura construida para el desarrollo del contrato; los gastos y las erogaciones generados como consecuencia de la renegociación de las servidumbres constituidas para el adecuado funcionamiento del proyecto minero; el valor de los trámites administrativos que deban realizarse por el cambio en las condiciones tanto del contrato como del título minero respecto del área explotable del mismo; y el valor de los gastos en los que deba incurrir el titular minero para mitigar los impactos generados por su actividad.

En el segundo caso, cobija todas aquellas sumas de dinero que dejen de ingresar al patrimonio del titular minero como consecuencia de la exclusión del área del título declarada como páramo, comprobables con la existencia de contratos en los que el titular haya enajenado los minerales no explotados cuya reserva se encontraba probada. En el caso en el cual el titular minero sea una persona jurídica, escenario en el cual su capital estará conformado, en parte, por el título minero, deberá acreditar la existencia de contratos con terceros celebrados antes de la ocurrencia del daño, que garanticen un retorno de utilidad por la venta del mineral cuya reserva ya estaba probada pero que aún no había sido explotada. También por el quebrantamiento de la posibilidad de obtener un beneficio patrimonial por la explotación de los minerales que hubieran podido ser encontrado durante la ejecución del contrato de concesión.

En el tercero, por el “dolor y padecimiento” sufrido por el titular minero teniendo en cuenta la incertidumbre en que se ha visto inmerso por la restricción y prohibición de la minería en los páramos, lo que ha afectado la actividad extractiva y con ello ha aminorado el disfrute económico y la garantía del derecho al trabajo y al mínimo vital.

Ahora bien, lo anterior puede entenderse a la luz de la situación socio-económica de los mineros tradicionales de Vetas entrevistados. De manera unánime afirman que la minería en el municipio es ancestral realizada por pequeñas y medianas empresas cuyos títulos mineros han sido heredados. También resaltan que la misma se ha llevado a cabo de manera legal y conservando al medio ambiente. Advierten adicionalmente que la mayoría de mineros llevan más de 20 años de vida trabajando en la explotación de oro, con lo cual han solventado las necesidades económicas de sus familias y su proyecto de vida.

Reconocen que los cambios en la legislación los ha llevado a invertir esfuerzos y recursos económicos para ajustarse a ellos y mantener los títulos mineros, provocando pérdidas económicas, reducción de las operaciones y desincentivando la inversión. También resaltan que la inseguridad jurídica ocasionada con dichos cambios ha impedido la comercialización de los títulos mineros, en el entendido que los mismos son innegociables, al no existir certeza para quien los adquiere de poder usarlos; lo que a su vez evita que los mineros puedan obtener algún ingreso.

Finalmente, la tasación de perjuicios en el caso estudiado debe tener en cuenta la tradicionalidad que ha caracterizado la actividad minera y cómo la misma ha definido la identidad y desarrollo del municipio de Vetas (Santander).

3.8 Análisis y triangulación de la información recolectada en las entrevistas realizadas a los mineros ancestrales del municipio de Vetas.

Por medio de la recolección de información de fuentes primarias correspondiente a una actividad de observación y conocimiento directo de los procesos de minería ancestral en el municipio de Vetas (Santander), el día 18 de enero de 2020 el grupo de investigación se trasladó a la empresa minera “Reina de Oro S.A.S” ubicada en la vereda el Volcán del municipio objeto de estudio en donde se procedió a conocer la mina y realizar una entrevista semiestructurada a veintisiete (27) mineros de la región.

En este sentido, es de suma importancia fundamentar la realización del trabajo de campo en el mes de enero de 2020, teniendo en cuenta la realidad social y económica que de manera previa se habría consolidado bajo la delimitación temporal de la presente investigación, es decir, durante el termino comprendido en los años 2016 – 2019.

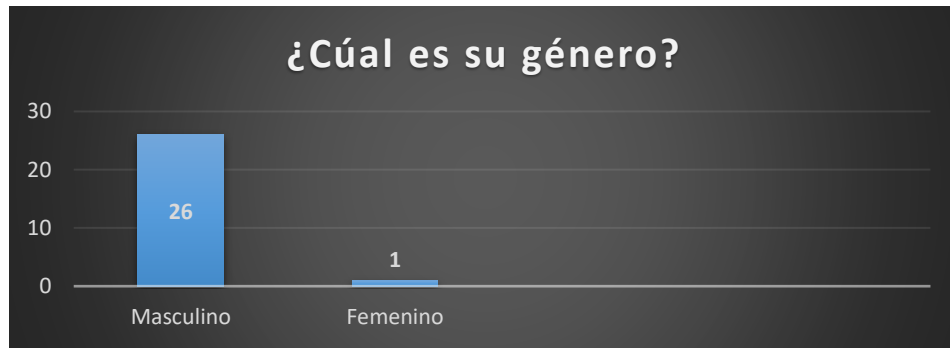
En primer lugar, se identificaron cuatro (4) variables correspondientes a las siguientes:

- I.** Datos del entrevistado.
- II.** Componente social.
- III.** Componente económico.
- IV.** Perjuicios.

En donde se realizó el siguiente análisis y triangulación de la información recolectada por medio de las entrevistas realizadas y aplicadas a una muestra correspondiente a veintisiete (27) mineros:

PRIMER COMPONENTE: Identificación del entrevistado.

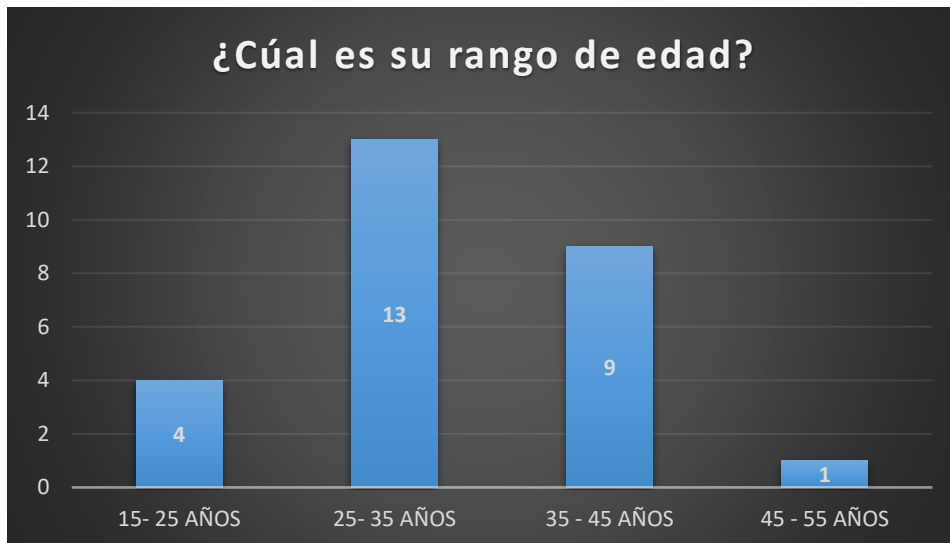
Gráfica N° 1: Identificación del género.



Fuente: Elaboración propia con fundamento en las entrevistas realizadas a los mineros del municipio de Vetás (Santander)

En este contexto, en relación a la identificación del género de los mineros se entrevistaron a veintiséis (26) mineros de género masculino y una (01) minera de género femenino.

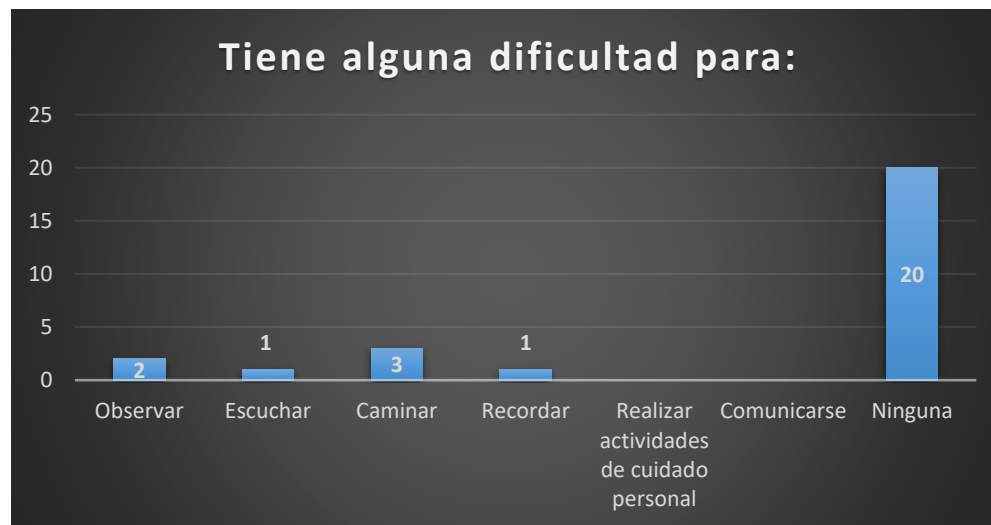
Gráfica N° 2: Rango de edad.



Fuente: Elaboración propia con fundamento en las entrevistas realizadas a los mineros del municipio de Vetás (Santander)

El rango de edad de las personas entrevistadas se identificó en el siguiente contexto: cuatro (04) mineros que tienen entre 15 – 25 años; trece (13) mineros que tienen entre 25 – 35 años; nueve (09) mineros que tienen entre 35 – 45 años; y finalmente un (01) minero que tiene entre 45 – 55 años.

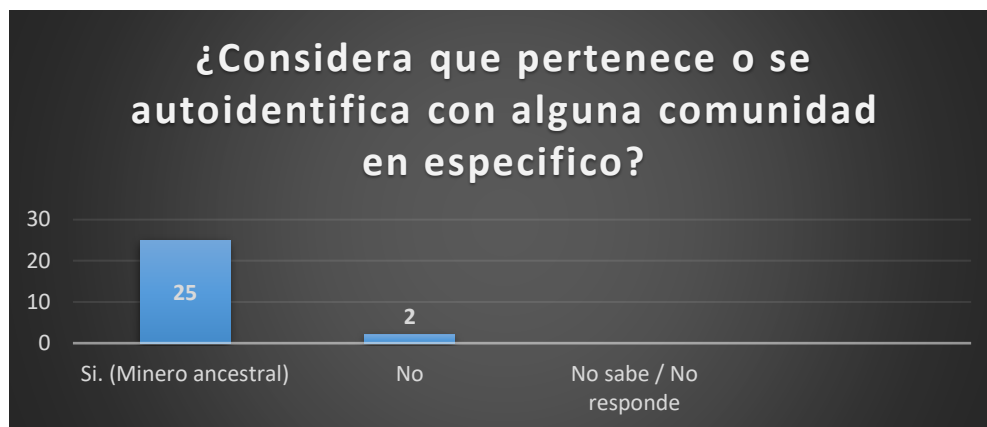
Gráfica N° 3: Identificación de las discapacidades físicas de los mineros.



Fuente: Elaboración propia con fundamento en las entrevistas realizadas a los mineros del municipio de Vetás (Santander)

En relación a los factores físicos de dificultad o limitación de los mineros se han identificado; dos (2) mineros que tienen problemas de visión, un (1) minero que tiene dificultades auditivas; tres (3) mineros que tienen limitaciones para caminar o moverse; y finalmente un (1) minero que tiene problemas para recordar o de memoria.

Gráfica N° 4: Auto identificación con la comunidad minera ancestral.

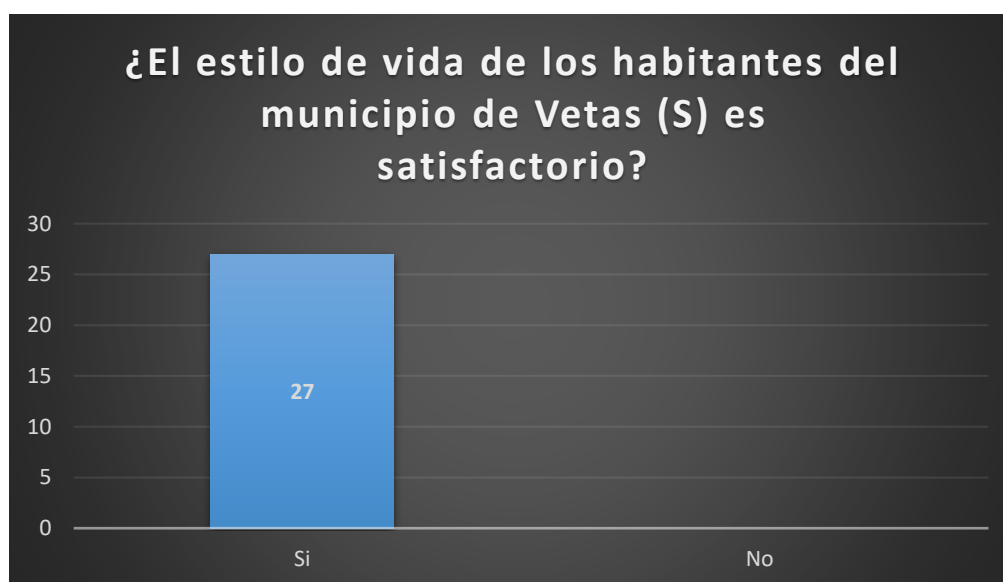


Fuente: Elaboración propia con fundamento en las entrevistas realizadas a los mineros del municipio de Vetás (Santander)

Así mismo, se identifica una fuerte identificación y apropiación de auto identificación con la comunidad de mineros ancestrales; en donde se han categorizado propiamente en la actividad un total de veinticinco (25) mineros de un total de los veintisiete (27) mineros entrevistados.

SEGUNDO COMPONENTE: Análisis social.

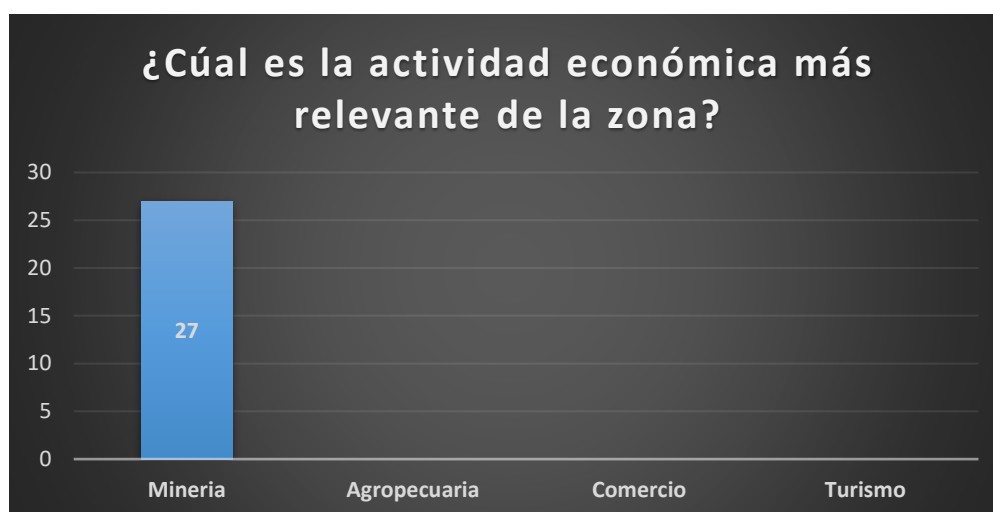
Gráfica N° 5: Análisis del nivel de vida de los mineros de Vetás (Santander).



Fuente: Elaboración propia con fundamento en las entrevistas realizadas a los mineros del municipio de Vetás (Santander)

En relación a la primera pregunta del componente social, todos los mineros entrevistados consideran que el estilo de vida del municipio de Vetás (Santander) es satisfactorio y tranquilo.

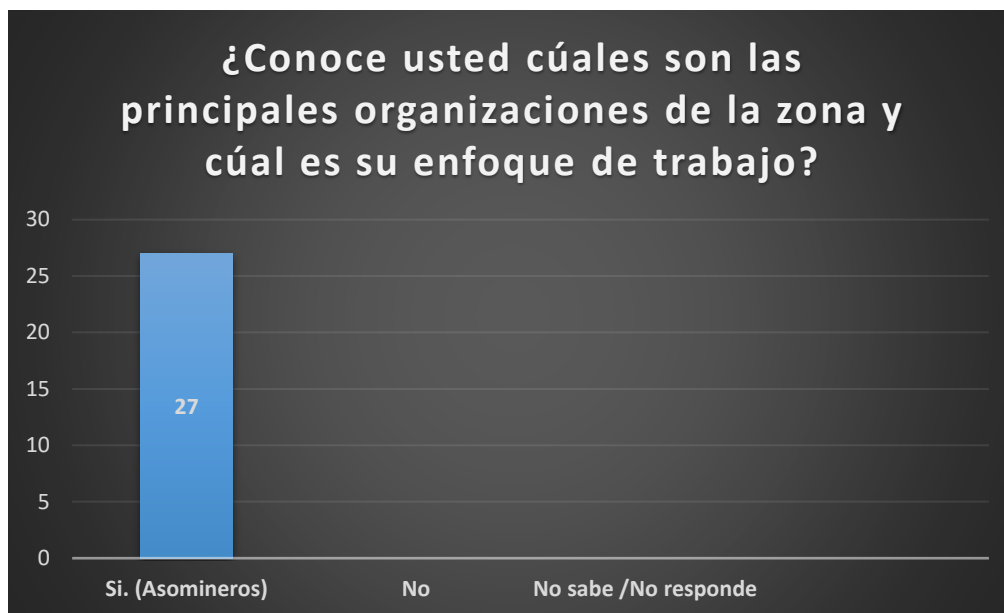
Gráfica N° 6: Identificación de la actividad económica más relevante en Vetás (Santander)



Fuente: Elaboración propia con fundamento en las entrevistas realizadas a los mineros del municipio de Vetás (Santander)

En su totalidad, las personas entrevistadas identifican la actividad minera como el principal sustento económico y laboral del municipio objeto de estudio.

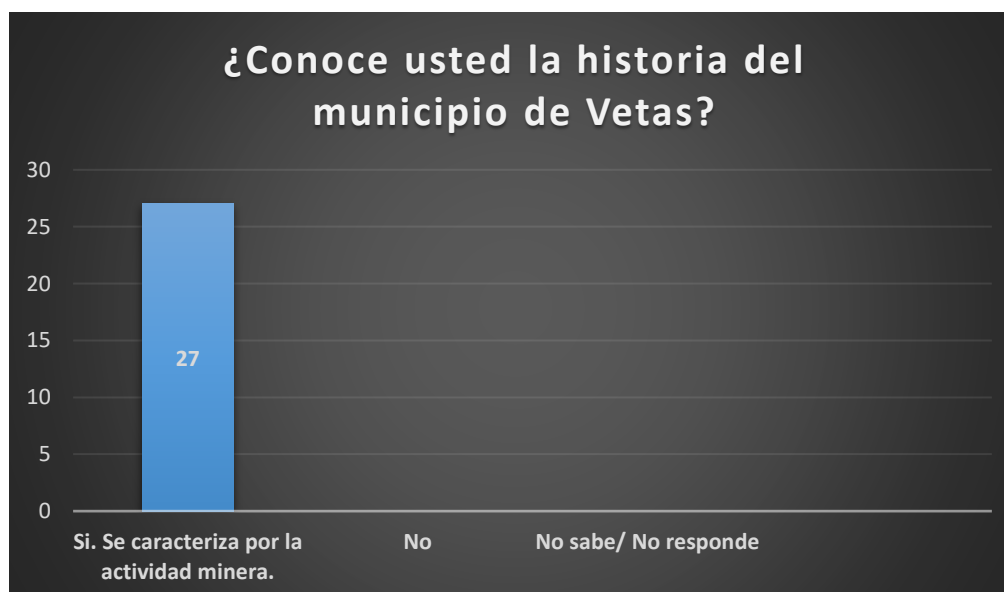
Gráfica N° 7: Identificación de las principales organizaciones de la zona y enfoque de trabajo.



Fuente: Elaboración propia con fundamento en las entrevistas realizadas a los mineros del municipio de Vetás (Santander)

Derivado de lo anterior, se indagó sobre la existencia y conocimiento de asociaciones que propenden por la actividad minera en donde se identifica que todos los mineros entrevistados conocen y hacen parte de “ASOMINEROS”.

Gráfica N° 8: Conocimiento sobre el fundamento histórico del municipio.

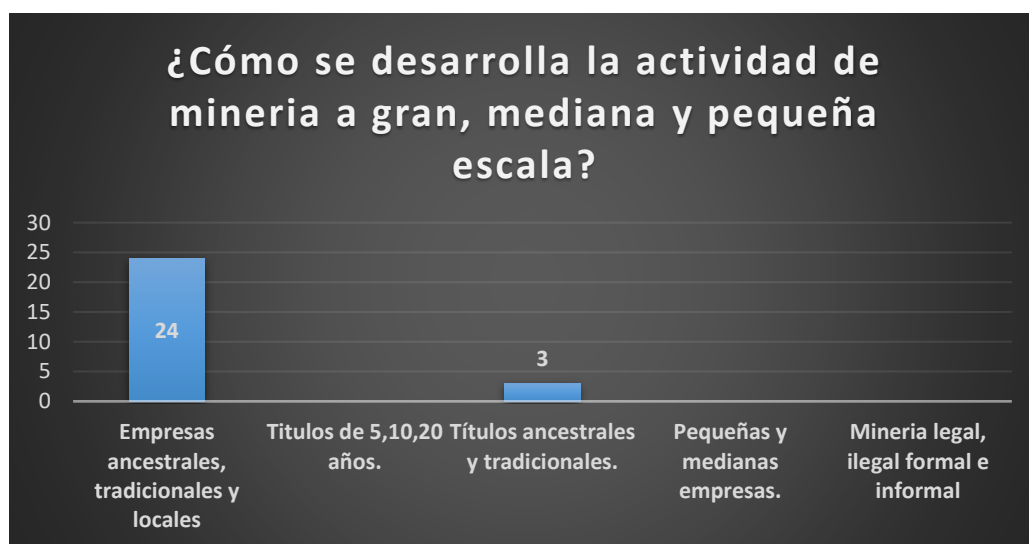


Fuente: Elaboración propia con fundamento en las entrevistas realizadas a los mineros del municipio de Vetás (Santander)

Respecto al conocimiento sobre el proceso histórico y la principal característica del municipio, en su totalidad los mineros entrevistados tienen conocimiento sobre la importancia de la actividad minera en Vetás (Santander).

TERCER COMPONENTE: Factor económico.

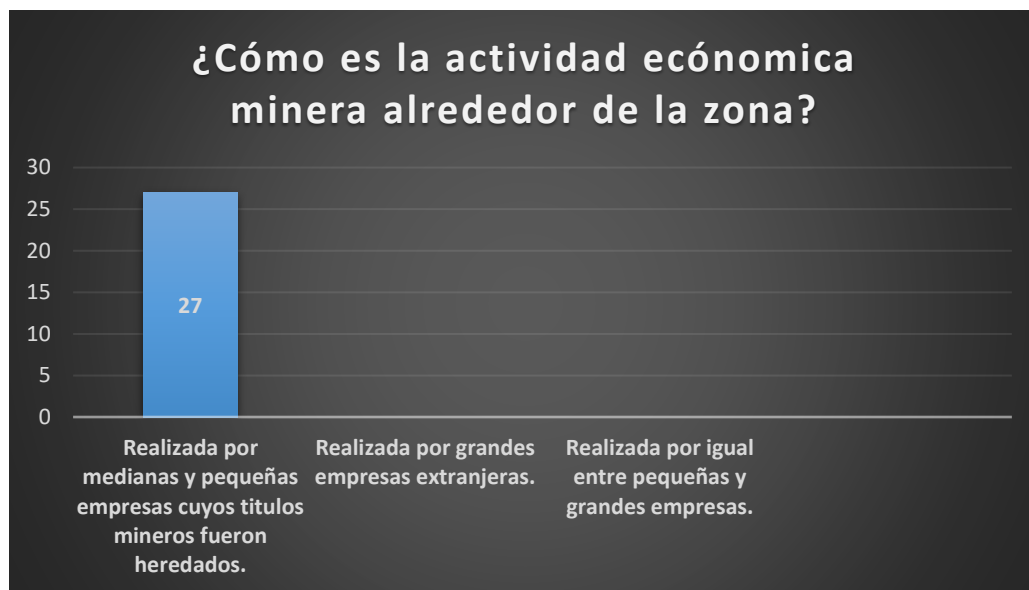
Gráfica N° 9: Desarrollo de la actividad minera a gran, mediana y pequeña escala.



Fuente: Elaboración propia con fundamento en las entrevistas realizadas a los mineros del municipio de Vetás (Santander)

En relación al conocimiento sobre el desarrollo de la actividad minera; se identifica que existen veinticuatro (24) mineros que consideran se fundamentan en las empresas ancestrales, tradicionales y locales; y tres (3) mineros que consideran se desarrollan a partir del otorgamiento de títulos ancestrales y tradicionales.

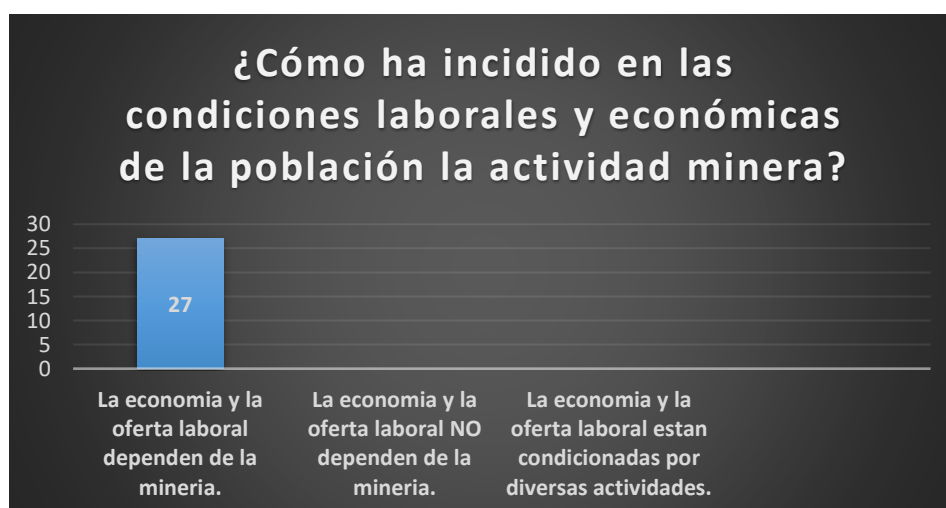
Gráfica N° 10: Identificación de la actividades mineras alrededor del Páramo de Santurbán.



Fuente: Elaboración propia con fundamento en las entrevistas realizadas a los mineros del municipio de Vetás (Santander)

Así mismo, respecto a la realización de la minería según la totalidad de las personas entrevistadas es desarrollada por medianas y pequeñas empresas cuyos títulos mineros fueron heredados.

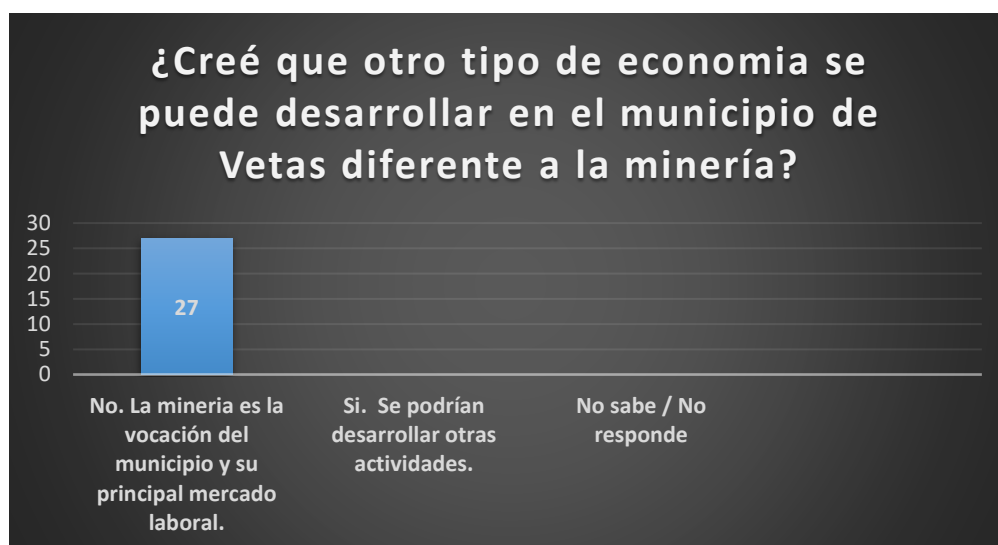
Gráfica N° 11: Incidencia del fallo de la Corte Constitucional en las condiciones laborales y económicas de la población minera de Vetás (Santander).



Fuente: Elaboración propia con fundamento en las entrevistas realizadas a los mineros del municipio de Vetas (Santander)

Al buscar identificar si existe una dependencia laboral y economía de la minería en el nivel de vida de los habitantes de Vetas; en su totalidad los entrevistados consideran que evidentemente depende económicamente de la actividad minera.

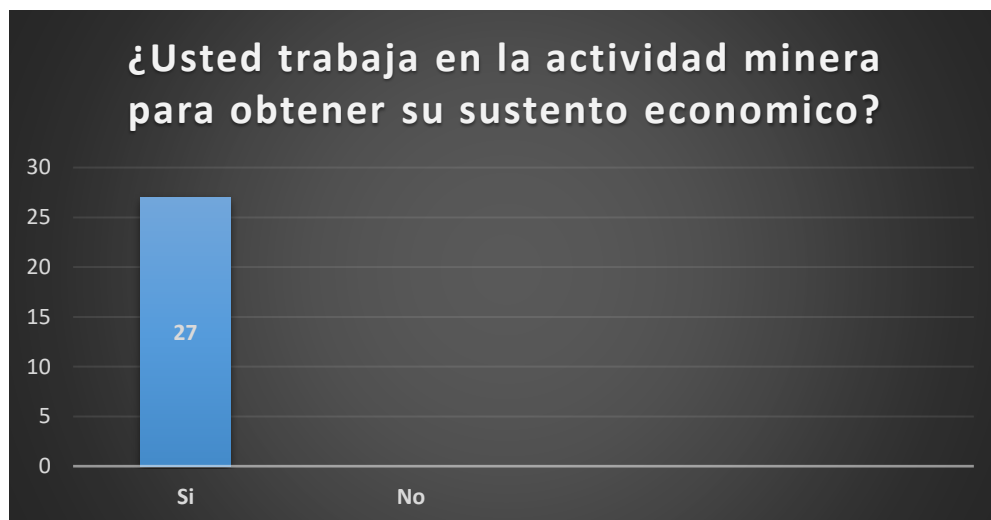
Gráfica N° 12: Contextualización sobre la posibilidad de desarrollar una actividad diferente a la minería en Vetas (Santander)



Fuente: Elaboración propia con fundamento en las entrevistas realizadas a los mineros del municipio de Vetas (Santander)

Sobre la posibilidad de desarrollar una actividad diferente a la minería como fuente económica y laboral, los entrevistados en su totalidad consideran que no es posible dadas las difíciles condiciones de acceso al municipio.

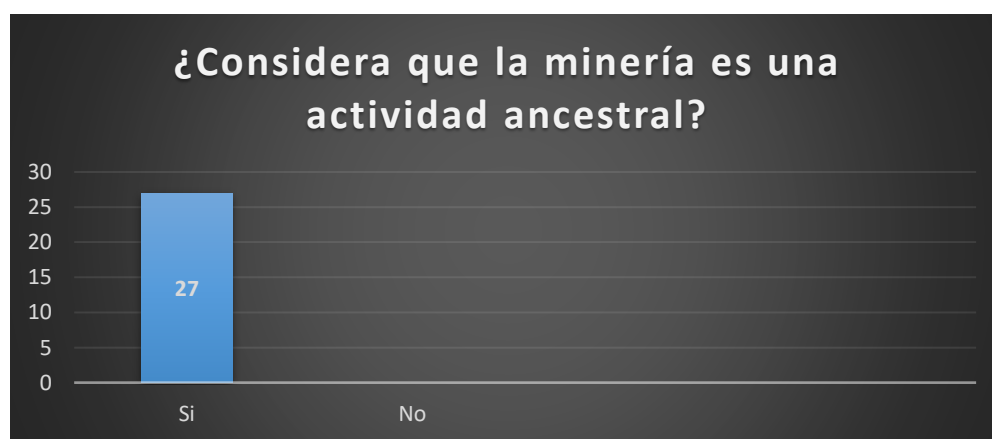
Gráfica N° 13: Indagación de la actividad minera como sustento económico principal en el municipio objeto de estudio.



Fuente: Elaboración propia con fundamento en las entrevistas realizadas a los mineros del municipio de Vetás (Santander)

Así mismo, el total de entrevistados afirma que desarrollan la actividad minera como su único sustento económico y el de sus familias.

Gráfica N° 14: Contextualización de la minería como una actividad económica ancestral.



Fuente: Elaboración propia con fundamento en las entrevistas realizadas a los mineros del municipio de Vetás (Santander)

En relación al desarrollo de la actividad minera, en su totalidad las personas entrevistadas aducen que en el municipio de Vetás (Santander) se desarrolla la minería como una actividad ancestral.

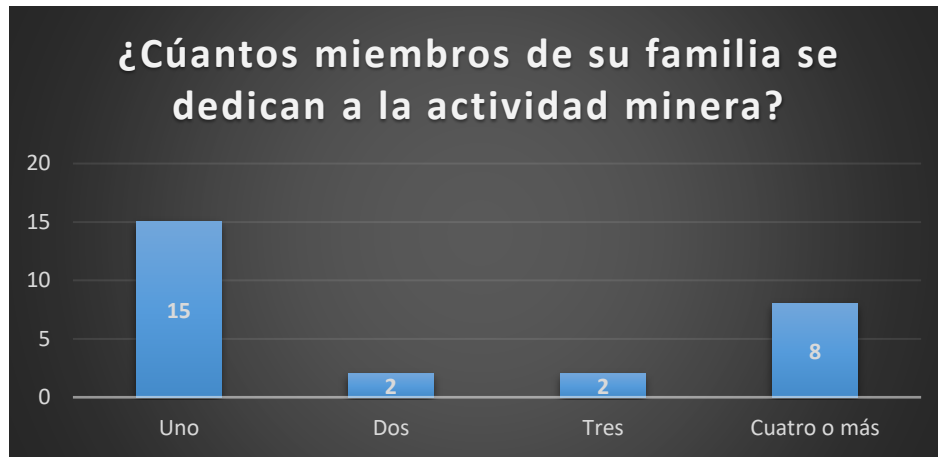
Gráfica N° 15: Identificación de la actividad minera como única fuente de ingresos económicos.



Fuente: Elaboración propia con fundamento en las entrevistas realizadas a los mineros del municipio de Vetás (Santander)

Frente al interrogante sobre la existencia de otra fuente de ingreso adicional a la actividad minera, en su totalidad los entrevistados argumentaron no poseer fuentes de ingresos adicionales o diferentes a lo que reciben por sus trabajos en las minerías artesanales.

Gráfica N° 16: Análisis de los miembros de los grupos familiares que se dedican a la actividad minera.

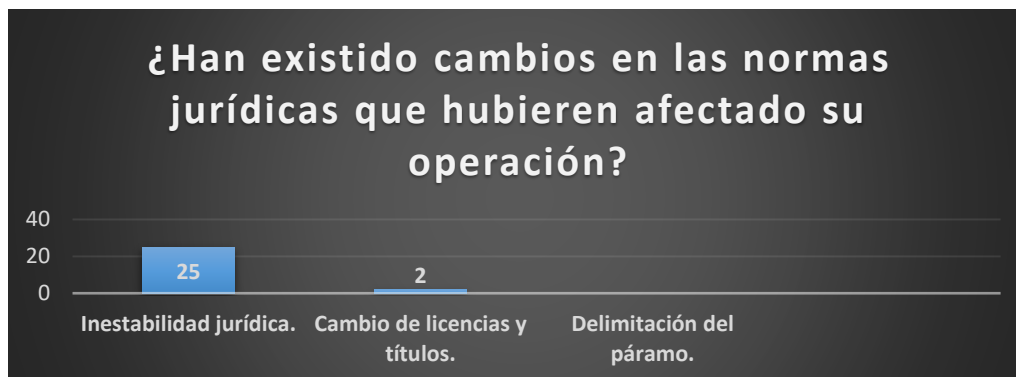


Fuente: Elaboración propia con fundamento en las entrevistas realizadas a los mineros del municipio de Vetás (Santander)

En relación a las personas que por grupo familiar se dedican a la actividad minera se han relacionado; quince (15) mineros que aducen por lo menos una (1) persona es minero; (2) mineros en donde por lo menos (2) personas se dedican a la minería; (2) mineros en donde por lo menos tres (3) personas se dedican a la minería; y finalmente (8) mineros que aducen que cuatro (4) o más miembros de su núcleo familiar se dedican a la minería.

CUARTO COMPONENTE: Perjuicios.

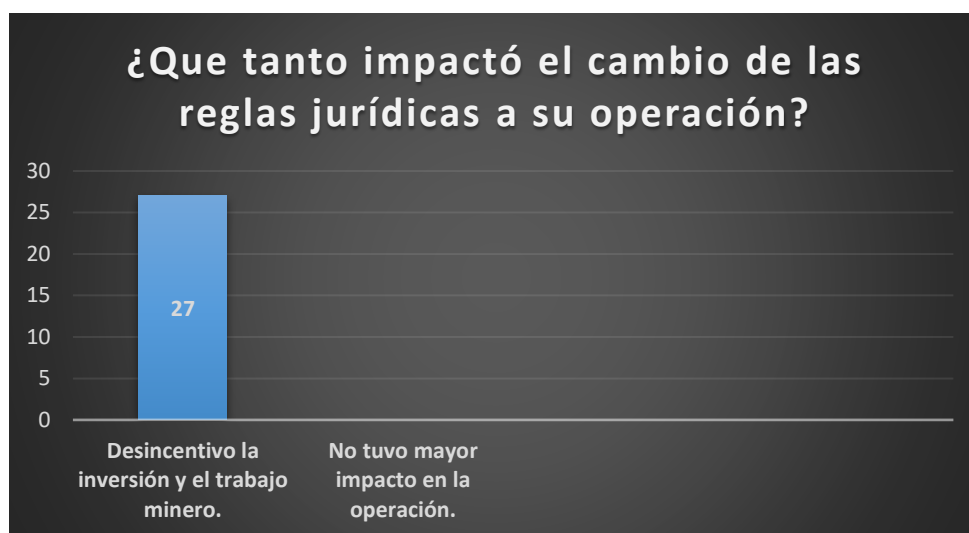
Gráfica N° 17: Nivel de afectación de las fallos judiciales en los procesos de actividad minera.



Fuente: Elaboración propia con fundamento en las entrevistas realizadas a los mineros del municipio de Vetás (Santander)

Frente al conocimiento sobre las modificaciones que han sido realizadas por medio del ordenamiento jurídico, para veinticinco (25) mineros entrevistados consideran que han generado una inestabilidad jurídica en sus actividades laborales; y para dos (2) mineros las modificaciones se han generado como producto del cambio de licencias y títulos.

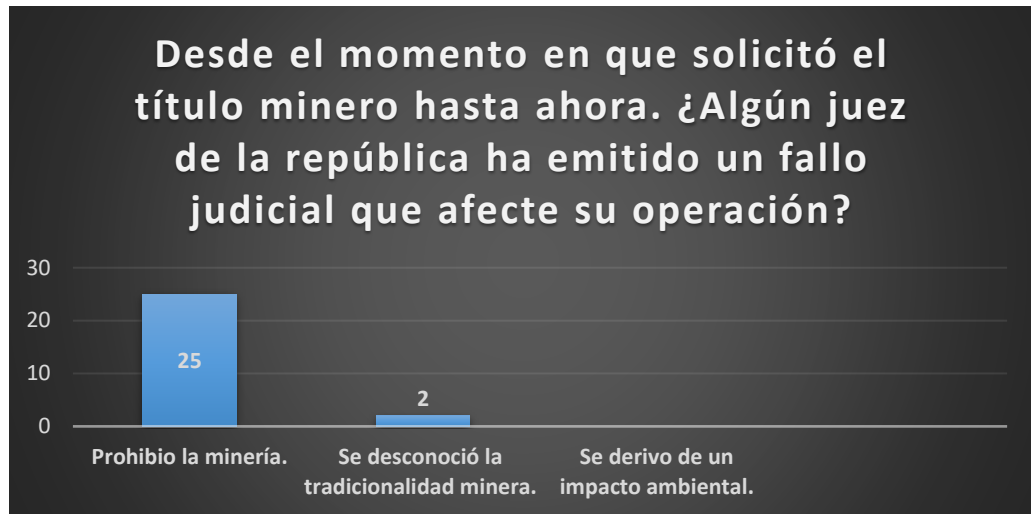
Gráfica N° 18: Impacto de la nueva reglamentación jurídica en la actividad minera.



Fuente: Elaboración propia con fundamento en las entrevistas realizadas a los mineros del municipio de Vetás (Santander)

Así mismo, frente al impacto generado por medio de las nuevas reglas jurídicas para la totalidad de los mineros entrevistados se ha propiciado un desincentivo en la inversión y el trabajo minero.

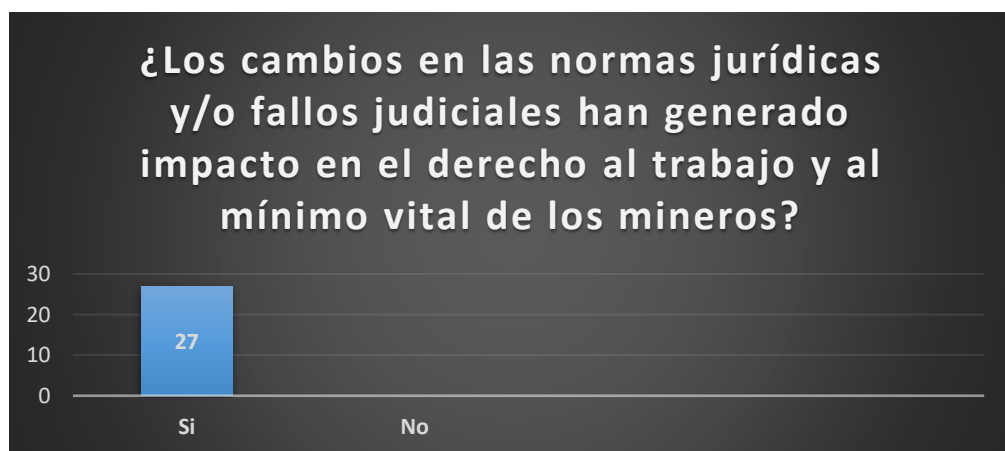
Gráfica N° 19: Identificación y conocimiento de la sentencia emitida por la Corte Constitucional.



Fuente: Elaboración propia con fundamento en las entrevistas realizadas a los mineros del municipio de Vetás (Santander)

De igual manera, en relación al conocimiento por parte de los mineros frente a la jurisprudencia de la Corte Constitucional aducen en su mayoría (veinticinco mineros) que conocen sobre la prohibición de la minería y dos (2) de ellos argumentan que mediante el fallo se desconoció la tradición minera del municipio.

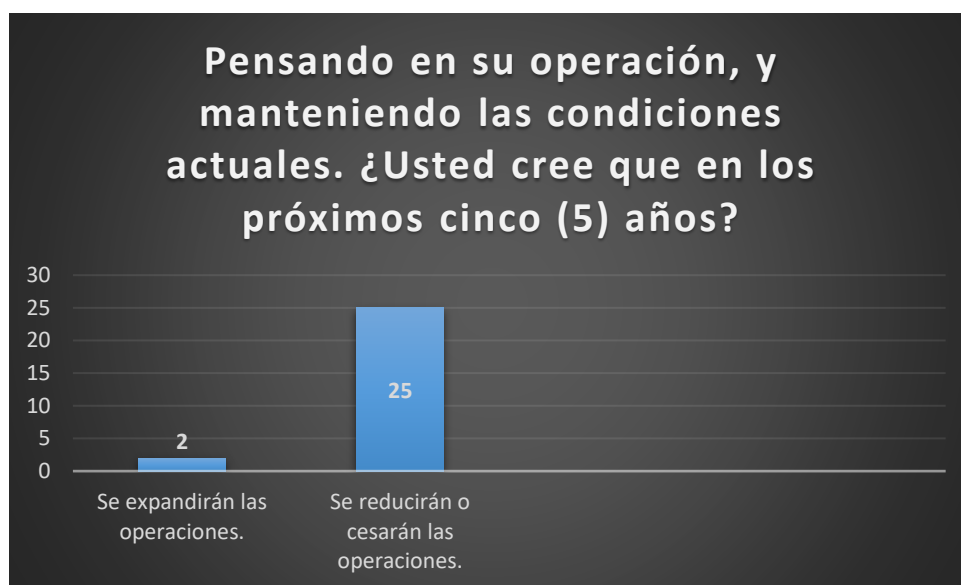
Gráfica N° 20: Impacto de los fallos judiciales en los derechos del trabajo y mínimo vital de los mineros de Vetás (Santander)



Fuente: Elaboración propia con fundamento en las entrevistas realizadas a los mineros del municipio de Vetás (Santander)

Derivado de lo anterior, para la totalidad de las personas entrevistadas se argumenta que el cambio generado por los fallos judiciales ha generado un impacto negativo en el derecho al trabajo y al mínimo vital de los mineros y su núcleo familiar.

Gráfica N° 21: Expectativa de las condiciones futuras en el ámbito laboral por parte de los mineros.



Fuente: Elaboración propia con fundamento en las entrevistas realizadas a los mineros del municipio de Vetás (Santander)

Finalmente, en relación a las expectativas de operación que tienen los mineros entrevistados, en su mayoría (veinticinco personas) consideran que se reducirán o cesarán las operaciones derivadas de la actividad minera en el municipio.

3.9 Postura de la Agencia Nacional de Minería y de ASOMINEROS. (Respuesta de los Derechos de Petición de solicitud de información)

En primer lugar, en ejercicio del derecho fundamental de petición de solicitud de información; el día 9 de junio de 2020 se solicitó ante la Agencia Nacional de Minería la solución de los siguientes interrogantes:

1. De los títulos mineros que usted supervisa y vigila como autoridad minera, ¿Cuántos hay en el Páramo de Santurbán?
2. De los títulos mineros que hay en el Páramo de Santurbán, ¿Cuántos se encuentran ubicados en el municipio de Vetás?
3. ¿Qué tipo de minería se registra o se desarrolla en el municipio de Vetás?
4. ¿Qué condiciones especiales se han exigido y/o requerido por parte de la autoridad minera en virtud de la declaratoria del Páramo y su delimitación a los titulares mineros?
5. ¿Cómo se ha constatado el cumplimiento de cada una de ellas (condiciones especiales y/o requerimientos) en cada uno de los títulos mineros?
6. Indique de manera expresa, clara y concreta, ¿Desde qué fecha se encuentran realizando actividades mineras los títulos mineros que están ubicados en Vetás?
7. Informe si antes de la inscripción y/o registro de los títulos mineros se tiene evidencia de actividad minera (exploración, construcción, montaje y explotación) en el municipio de Vetás.
8. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique ¿Cuáles titulares mineros venían desarrollando esta actividad minera y desde qué época?

9. ¿Se han dado casos del fenómeno de minería ilegal en el Páramo de Santurbán, especialmente en el municipio de Vetas? De ser así ¿Qué tipo de acciones ha ejecutado la Agencia Nacional de Minería para evitar o contrarrestar dicho fenómeno?

10. Solicito se expida a mi costa la cartografía actual de los títulos mineros ubicados en el Páramo de Santurbán en general y de los que se encuentran ubicados en el municipio de Vetas (Santander).

En este sentido, se obtuvo respuesta el día 18 de junio de 2020 por medio del Radicado ANM No: 20209040410161 en el siguiente contexto:

- En relación a los numerales 1, 2 y 10 de su petición, dicha información se encuentra disponible para cualquier ciudadano, y la misma puede ser consultada en la página principal de la Agencia Nacional de Minería www.anm.gov.co, entrando al Link, ANNA minería, y posteriormente al de Acceso plataforma, donde encontrará la pestaña de Visor geográfico, en el cual podrá consultar la información sin ningún tipo de restricción, costo, ni de necesidad de usuario o contraseña. Para su conocimiento en la mismo Link de ANNA minería, y antes de ingresar al de Acceso plataforma, se encuentra otra pestaña denominada información Anna Minería en la cual se encuentran documentos y/o video tutoriales que la guíaran para la consulta de la información, así como para generar la cartografía que requiere.
- Respecto al numeral 3, se informa que el tipo de minería en los títulos que se encuentran adelantando labores mineras (títulos con documento técnico aprobado y licencia ambiental otorgada) en jurisdicción del Municipio de Vetas corresponde a la de subterránea.

- Respecto al numeral 4, me permito informarle que la ANM para el caso de los títulos mineros superpuestos con el área delimitada como Jurisdicción Santurbán por medio de la Resolución 2090 de 2014, en ejercicio de sus funciones de seguimiento y control, vigila que los titulares mineros den cumplimiento a las restricciones establecidas en dicha resolución para el desarrollo de las actividades mineras.
- En relación al numeral 5, el cumplimiento las obligaciones de los titulares mineros, es verificada en cada evaluación documental que se realiza al expediente minero y en cada visita de seguimiento y control que se lleva a cabo a cada título minero.
- Respecto al numeral 6 cada título minero puede adelantar su actividad minera de acuerdo con la etapa contractual en la cual se encuentre, exploración, construcción y montaje y explotación, y una vez cumpla con los requisitos de ley para cada etapa.
- En relación al numeral 7 y 8 esta entidad no cuenta con información anterior al otorgamiento de un título, por lo cual no es posible atender los señalados numerales.
- Respecto al numeral 9 sea lo primero advertir que la ANM no tiene competencia sobre la extracción ilícita de minerales, y de conformidad con el Artículo 306 del Código de Minas, es competencia de las Alcaldías de los Municipios actuar cuando se establecen casos de extracción minera sin cumplir los requisitos legales; ya en el caso de la actuación de la ANM, se restringe solamente cuando los titulares interponen acciones de amparo administrativo por una presunta perturbación dentro del área de su título minero, caso en el cual se atiende la diligencia y cuando el dictamen de la misma es concederlo, se compulsa a la autoridad competente, es decir a la Alcaldía para que realice el procedimiento legal de suspender dicha perturbación.

Así mismo, por medio del ejercicio del derecho fundamental de petición presentado el día 17 de junio a 2020 a ASOMINEROS; de manera respetuosa se formularon las siguientes preguntas:

1. De los títulos mineros que hay en el Páramo de Santurbán; ¿Cuántos se encuentran ubicados en el municipio de Vetás – Santander?
2. ¿Qué tipo de minería se registra o se desarrolla en el municipio de Vetás – Santander?
3. ¿Qué tipo de restricciones o de condiciones especiales se han exigido y/o requerido por parte de la autoridad minera a los titulares mineros de Vetás (S) en virtud de la declaratoria del Páramo de Santurbán y de su delimitación y cómo se ha constatado el cumplimiento de cada una de ellas en los títulos mineros?
4. Los títulos mineros que están ubicados en Vetás – Santander; ¿Desde qué fecha se encuentran realizando su actividad minera?
5. ¿Se han dado casos de minería ilegal en el Páramo de Santurbán, especialmente en el municipio de Vetás? De ser así ¿Qué tipo de acciones se han ejecutado para contrarrestar este fenómeno y de que autoridades han recibido apoyo?
6. Como representante de la Asociación de Mineros de Santander, ¿Cómo determina el impacto de cada una de las decisiones que se han emitido desde el sector central, así como de la Corte Constitucional mediante los fallos relacionados con el tema de la prohibición de la minería y de la participación para el nuevo ejercicio de la delimitación del Páramo de Santurbán?

7. Qué tipo de ayudas han recibido los titulares mineros del municipio de Vetas (Santander) con ocasión de la prohibición y/o delimitación del Páramo de Santurbán.

En este contexto, derivado de lo anterior se obtuvo respuesta de ASOMINEROS el día 11 de julio de 2020 en donde nos manifestaron las siguientes respuestas frente a los planteamientos realizados:

PRIMERA PREGUNTA: De los títulos mineros que hay en el Páramo de Santurbán; ¿Cuántos se encuentran ubicados en el municipio de Vetas – Santander?

Sugerimos respetuosamente canalizar su inquietud a la Agencia Nacional de Minería, con el propósito de establecer cuántos títulos mineros se encuentran presentes en el municipio de Vetas y cuáles de ellos, desde la perspectiva de dicha entidad, se encuentran localizados en el páramo de Santurbán.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, desde nuestra percepción y visión de territorialidad, la Resolución 2090 de 2014 contiene graves errores cartográficos en la delimitación del ecosistema de páramo.

Desde nuestra perspectiva y visión de territorialidad, la cual a su vez incorpora criterios técnicos, sociales y económicos, los límites del páramo son aquellos que forman parte de la propuesta de delimitación radicada ante el MADS, por el Municipio de Vetas, Asomineros y la Veeduría Ciudadana Dignidad Minera, durante la fase de consulta del nuevo proceso de delimitación, y que esperamos, sea incorporada en la fase de concertación y delimitación final.

Se debe resaltar que la minería, no solamente ha modelado la consolidación de un socio-ecosistema de características específicas y únicas, sino que ha permitido la construcción de una gobernanza para la conservación del territorio en el municipio de Vetas, garantizando mayores términos de protección frente a la nueva delimitación y los criterios señalados en la sentencia T-361 de la Corte Constitucional.

Considerando lo anteriormente expuesto, es importante aclarar que, en el municipio de Vetas, nuestra Asociación ha identificado 16 títulos mineros, en donde históricamente se han desarrollado las actividades mineras presentes en el territorio, actualmente bajo la titularidad de seis empresas mineras: Reina de Oro, La Elsy, Trompetero, Providencia, Potosí y Minera Vetas. De ellas, las cinco primeras forman parte de Asomineros, mientras que Minera Vetas, aunque no forman parte de la Asociación, participan activamente en la defensa de la minería frente al proceso de delimitación.

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Qué tipo de minería se registra o se desarrolla en el Municipio de Vetas (S)?

La minería presente en el municipio de Vetas, se clasifica bajo la categoría de pequeña minería. Es de tipo empresarial, formal, legal, con fuertes elementos de ancestralidad y enmarcada en un proceso de transformación y mejoramiento de prácticas mineras y expectativas de incrementar de manera significativa, a corto y mediano plazo, los volúmenes de extracción de mineral, con estricto cumplimiento de la normatividad y altos estándares de responsabilidad ambiental y social.

TERCERA PREGUNTA: ¿Qué tipo de restricciones o condiciones especiales se ha exigido y/o ha requerido por parte de la Autoridad Minera a los titulares mineros en virtud de la declaratoria del Páramo de Santurbán y de su delimitación y como se ha constatado cada una de ellas en los títulos mineros?

La principal restricción corresponde a la prohibición para desarrollar actividades mineras en aquellas zonas que fueron delimitadas bajo la categoría de páramo funcional o bajo la figura de conservación en la Resolución 2090 de 2014. En tal sentido, la ANM, mediante actos administrativos y anotaciones en el Registro Minero Nacional, realizó un re-alinderamiento de los títulos mineros, así como la reducción de sus áreas afectadas por la delimitación, en un proceso de tipo administrativo, en donde los titulares no tuvieron oportunidad de intervenir en defensa de sus derechos e intereses.

CUARTA PREGUNTA: Los títulos mineros que están ubicados en Vetas(S) ¿Desde qué fecha se encuentran realizando la actividad minera?

No es posible precisar una fecha para el inicio de la actividad minera, toda vez que la minería en el municipio de Vetas se ha desarrollado incluso desde tiempos precolombinos. La historia de Vetas, su fundación en el año 1551 y el modelo histórico de desarrollo, se encuentran asociados a la minería en su territorio, condición respaldada en diferentes crónicas, registros y análisis históricos.

Es decir, la actividad minera en el municipio de Vetas ha antecedido el desarrollo y avance regulatorio que, sobre minería y medio ambiente, ha presentado el Estado colombiano en las últimas décadas. En tal sentido, el otorgamiento de títulos mineros,

como consecuencia del avance normativo y los avances en materia de ordenamiento minero, corresponde a procesos iniciados desde los años 90s.

QUINTA PREGUNTA: ¿Se han dado casos de minería ilegal en el Páramo de Santurbán, especialmente en el Municipio de Vetas? ¿De ser así que tipos de acciones se han ejecutado para contrarrestar este fenómeno y de que autoridades han recibido apoyo?

Es evidente que el proceso de delimitación y su prolongación en el tiempo, ha generado el incremento e intensificación de las actividades de extracción ilícita de mineral o minería ilegal en los diferentes títulos de las empresas referidas en el numeral 1.

En este caso, la prolongación indefinida del proceso de delimitación ha favorecido el avance descontrolado de la minería ilegal, en detrimento de las empresas mineras legalmente constituidas, generando graves afectaciones ambientales, sociales y económicas.

Para contrarrestar el fenómeno de la minería ilegal, las empresas mineras han hecho múltiples llamados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) para que se finalice de manera ágil el proceso de delimitación y se incorpore de manera real y efectiva, la propuesta de delimitación construida en el municipio de Vetas y radicada en la fase de consulta, como una alternativa que permite solucionar el conflicto socio ambiental y asegurar el ordenamiento de actividades económicas, entre ellas la minería, garantizando el derecho al trabajo y asegurando la conservación del páramo de Santurbán.

Más allá de manifestaciones o discursos de apoyo por parte de entidades como la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o el Ministerio de Minas y Energía, entre otros; principalmente en eventos o reuniones desarrolladas durante el nuevo proceso de delimitación; no se evidencian acciones o actuaciones concretas orientadas a solucionar la problemática de la extracción ilícita de mineral. Al contrario, se evidencia que las citadas entidades no tienen una respuesta y no saben qué hacer para atender y solucionar las graves consecuencias que ocasionaría para el municipio de Vetas, una delimitación excluyente del páramo de Santurbán. Frente a lo anterior, se evidencia que el Ministerio, desde diferentes pretextos y argumentos, ha pretendido de manera sistemática, injustificada y continua en el tiempo, demorar y dilatar el proceso de delimitación.

Adicionalmente, las empresas mineras han presentado múltiples solicitudes de Amparos Administrativos ante la Agencia Nacional de Minería, buscando frenar el avance de las actividades de extracción ilícita de mineral. Al respecto se debe señalar que, aunque la Agencia ha concedido los amparos administrativos solicitados, delegando en la Alcaldía Municipal de Vetas las funciones de prevención y control de las actividades ilícitas referidas, se evidencia que las capacidades del ente municipal son insuficientes para atender la magnitud de la problemática descrita. Es decir, se ha llegado a una situación repetitiva en donde se ha dado cumplimiento a los trámites y diligencias sin que se haya realizado ni garantizado un control real y efectivo de las actividades ilícitas.

SEXTA PREGUNTA: ¿Como representante de la Asociación de Mineros de Santander, Como determina el impacto de cada una de las decisiones que se ha emitido del Sector

Central, así como de la Corte Constitucional mediante los fallos relacionados con el tema de la prohibición de la minería y de la participación para el nuevo ejercicio de la delimitación del Páramo de Santurbán?

Las actuaciones erráticas y contradictorias de las entidades del Estado, así como las decisiones emitidas por la Corte Constitucional relacionadas con la prohibición de las actividades mineras, han generado enormes afectaciones a las Empresas mineras legalmente constituidas, presentes en el Municipio de Vetás, las cuales han debido asumir, de manera injusta y asimétrica, los costos económicos y sociales del conflicto socio-ambiental ocasionado por el proceso de delimitación. Es decir, los vacíos en las actuaciones del Estado, la prolongación indefinida del proceso de delimitación y los graves problemas sociales ocasionados por dicho proceso, han sido trasladados a las empresas presentes en el municipio.

Se debe señalar que la incertidumbre, la falta de articulación entre las instituciones del Estado, la imposibilidad de avanzar en los diferentes trámites y solicitudes radicadas ante la CDMB, así como las condiciones de orden público y sociales en el municipio, han impedido a las Empresas desarrollar con eficiencia sus planes mineros de explotación. Es decir, las empresas no solo han asumido los costos del conflicto socio ambiental de la delimitación, sino que han sido afectadas en la reducción de sus ingresos, frente a escenarios normales y óptimos de operación. Todo lo anterior, supone una amenaza para garantizar la continuidad de las empresas en sus operaciones.

Finalmente, es evidente que el mayor impacto ocasionado por el interminable proceso de delimitación del páramo de Santurbán se manifiesta a través de la generación,

intensificación y prolongación de un conflicto socio-ambiental y una grave crisis social en el municipio de Vetás; caracterizada por la incertidumbre sobre la continuidad de la minería como actividad económica productiva, la destrucción de empleo formal y sobre todo, graves afectaciones a la estructura y tejido social del municipio. En este caso, los costos de dicho conflicto y los efectos derivados de su intensificación y prolongación han sido trasladados a las comunidades, y principalmente, por las empresas mineras.

Finalmente, por medio del presente apartado del trabajo investigativo es de suma importancia realizar claridad que las informaciones recolectadas por medio de los derechos de petición anteriormente relacionados se circunscriben a la realidad social y actualidad investigativa del límite temporal desarrollado metodológicamente por medio del planteamiento de la pregunta de investigación.

3.10 Análisis y solución del caso sub examine por medio de la pregunta de investigación.

Por medio del planteamiento del escenario problema de la presente investigación se ha estructurado la pregunta correspondiente a identificar: *¿Cuál es la responsabilidad del Estado por la vulneración de los derechos al trabajo y mínimo vital de los mineros ancestrales del municipio de Vetás (Santander) durante el periodo 2016 -2019?*, en donde se desarrolló un ejercicio de investigación y recolección de información de fuentes primarias y secundarias por medio de las cuales se logró identificar la existencia de una responsabilidad patrimonial por parte del Estado colombiano, en virtud del cumplimiento de los postulados que se identifican en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991.

La cual se ha de constituir a partir de los graves e injustificados perjuicios ocasionados a la comunidad pertenecientes a los mineros ancestrales del municipio de Vetás (Santander), ya que como se mencionó con antelación, si bien es cierto, es un deber de todas las personas preservar y cooperar en el mantenimiento de los recursos naturales, también, se han de tener en cuenta las personas que desde épocas inmemoriales se han dedicado a la actividad minera como su única fuente de ingresos económicos y de la que sobreviven las mayorías de familia del municipio sub examine.

De igual manera, como evidencia del trabajo de campo desarrollado por medio de la observación y contacto directo con los mineros ancestrales se identificó un contexto de tradición e identificación de la minería como la única fuente de trabajo de la mayoría de las personas que viven en Vetás; por cuanto es de suma importancia realizar un énfasis en la importancia de contextualizar los fallos judiciales con los escenarios en específico, ya que se debe proferir fallos con enfoques de justicia y equidad para las personas que no gozan de las mismas oportunidades laborales que se podría tener en la capital del país.

Conclusiones

Por medio de la identificación de la responsabilidad del Estado por la vulneración de los derechos al trabajo y mínimo vital de los mineros ancestrales del municipio de Vetás (Santander) durante el periodo 2016 -2019; Se ha evidenciado que el Estado puede ser hallado responsable cuando se ocasionan perjuicios a las personas en ejercicio de una actividad lícita estatal, generando una desigualdad frente al sistema de cargas que estas deben soportar, rompiéndose de esta manera el equilibrio de las cargas públicas por un daño especial.

Así mismo, que la regulación de la minería en Colombia da cuenta de un propósito constante: fomentar, acrecentar y consolidar la actividad minera como motor de desarrollo económico nacional, regional y local; por cuanto, la minería es tradicional en el municipio de Vetás, Santander, y su economía gira alrededor de la explotación de oro, así como sus costumbres y tradiciones. Tiene registros de actividad minera desde la época de la colonia y títulos mineros heredados entre generaciones, en donde la minería es la fuente exclusiva de ingresos del 75% por ciento de la población productiva del Municipio de Vetás y el casco urbano del municipio está dentro de la zona del páramo.

De igual manera, los actos de delimitación y las decisiones judiciales han ocasionado daño a los mineros del municipio de Vetás al impedir la realización de la actividad minera en el páramo de Santurbán, sin que existan alternativas viables de transformación productiva o medidas compensatorias y restaurativas.

No obstante, por medio de los actos de delimitación y las decisiones judiciales estudiados se limita el acceso a la justicia de los mineros de Vetás afectados pues las acciones judiciales no salvaguardan sus derechos ni reparan los daños sufridos.

Teniendo en cuenta esos factores la responsabilidad estatal nace con la carga injustificada que deben soportar los mineros de Vetás traducida en la vulneración a i) la tradicionalidad de su actividad y los derechos subjetivos adquiridos en cumplimiento de los requisitos legales y ambientales, ii) los derechos al trabajo y al mínimo vital por tratarse de su única fuente lícita de ingresos, iii) el derecho de acceso a la justicia por tratarse de actos de delimitación y decisiones judiciales legales; y iv) la deficiencia de medidas compensatorias y restaurativas a los perjudicados, los sitúa en un estado de desprotección que resulta injusto sobre el minero, pero además desigual respecto de actividades extractivistas de recursos naturales permitidas.

En virtud de ello, los perjuicios a liquidarse en el caso estudiado deben tener en cuenta la tradicionalidad y ancestralidad que ha caracterizado la actividad minera y cómo la misma ha definido la identidad y desarrollo del municipio de Vetás, Santander, concretándose en i) el “dolor y padecimiento” sufrido por el titular minero por la incertidumbre en que se ha visto inmerso por la restricción y prohibición de la minería en los páramos que ha afectado la actividad extractiva; y en ii) el detrimento patrimonial por la imposibilidad obtener un beneficio patrimonial por la explotación de los minerales.

Recomendaciones

En procura de aportar una solución a la situación de vulnerabilidad que como se expuso, presentan los mineros tradicionales de Vetás, se sugiere a continuación unas recomendaciones, que parten de la necesidad de formulación de una política pública territorial que genere gobernanza:

- **EN EL ÁMBITO SOCIAL:** Liderando procesos de diálogo y decisiones consensuadas que permitan resolver conflictos y generar espacios de fuente comunitaria, en los cuales se garantice la participación de todos los actores en el proceso de transformación y compensación por la pérdida de los derechos extractivos desde sus fases iniciales. Para ello debe facilitarse la información objetiva, y la comprensión de los beneficios y afectaciones de las actividades económicas en el territorio, con miras a la toma de decisiones informadas; capacitación o formación educativa de los actores y vigilancia para el cumplimiento de los compromisos que se adquieran.

También un rol protagónico del Gobierno nacional en el relacionamiento de las comunidades, las autoridades locales y las empresas en el territorio para la generación de confianza y la legitimidad de los procesos a adelantarse. Se trata de una gestión de lo público desde el nivel nacional y hacia lo local enfocado en la generación de escenarios de gobernanza.

Este lineamiento implica además que debe garantizarse el derecho al desarrollo regulando al efecto el proceso de diálogo entre los actores, la participación laboral de los miembros de la comunidad y el carácter vinculante de las decisiones que se tomen en esos espacios. Debe realizarse con pertinencia cultural atendiendo a las características propias de la tradicionalidad y ancestralidad minera que es impactada. Es un trabajo con la comunidad

de formación y capacitación que permita comprender los impactos del proceso de transformación y compensación, su papel incidente y el rol del Estado y la empresa, siendo importante también exigir que las autoridades locales destinen inversión a los territorios y particularmente a las zonas de afectación directa, para que se mejoren las condiciones de vida de los habitantes.

-EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL: Deben reforzarse los ejercicios de supervisión y fiscalización del proceso de transformación y compensación; deben generarse también mecanismos de auditoría y control de su cumplimiento. Aunado a ello deberán contemplarse mecanismos de articulación con los planes de desarrollo municipal y departamental.

De igual forma lineamientos de política pública dirigidos a aumentar la transparencia, controlar los conflictos de interés entre los distintos actores y contemplar mecanismos efectivos de *control sobre el destino de los recursos* que se destinen, evitando que su utilización recaiga en discrecionalidad. Promover la cultura participativa y dialógica de la ciudadanía.

Finalmente, condensar los lineamientos señalados en Acuerdos Territoriales-AT- con los actores para promover sinergias y relacionamiento entre las comunidades, las empresas y las autoridades, posibilitando elementos de concertación, negociación, y acción conjunta. Se trata en últimas de un objetivo central para favorecer la articulación territorial entre los actores y por tanto garantizar el derecho al trabajo y al mínimo vital de los mineros tradicionales.

Referencias

Doctrina.

Acosta, L. & Medina, R. (2016). Los albores del Estado social de derecho en el Estado colombiano. *Revista Jurídicas*, 13 (1), 132-142.

Arango, R. (2002). *Jurisprudencia constitucional sobre el derecho mínimo vital*. Ed. Facultad de Derecho, Universidad de los Andes. Colombia.

Buitrago, E. (2014). Una historia y una vida alrededor del oro: territorialidad y minería en el municipio de Vetás, Santander, Colombia. En *Rev. minero en Colombia y América Latina*.

Buitrago, E. (2012) *Entre el agua y el oro: tensiones y reconfiguraciones territoriales en el municipio de vetas, Santander, Colombia*. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Antropología, Bogotá - Colombia.

Contreras, L. (2015). La memoria local como alternativa de relato en el conflicto socio ambiental: tensiones territoriales en el Páramo de Santurbán, caso de Vetás, Santander. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Carrera de Ciencia Política, Bogotá D.C.

Cuenca, R. (2018). *La responsabilidad patrimonial de la administración pública originada en el daño ambiental*. 1a. ed., Bogotá: Universidad Manuela Beltrán.

García, C. (2007). *El daño moral y a la vida de relación, y su aplicación en el sistema jurídico colombiano*. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga.

Gil, E. (2013). *Responsabilidad extracontractual del Estado*. (VI Edición), Bogotá: Editorial Temis.

González, O. (2009). Responsabilidad del Estado en Colombia: Responsabilidad por el hecho de las Leyes. Revista UIS Humanidades, Vol. 37 Núm. 1.

Gordillo, A. (1998). Tratado de Derecho Administrativo - De la defensa del usuario y del administrado- 1a ed, Medellín, Fundación de derecho Administrativo, Biblioteca Jurídica DIKE.

Güiza, L. & Rodríguez, C. (2016) Actualidad y desafíos del derecho minero colombiano. Editorial Universidad del Rosario.

Hernández, C. (2019). Vetas sueño minero del oro. Alcaldía Municipal de Vetas.

Long, M. (2000). Los Grandes Fallos de la Jurisprudencia Administrativa Francesa, Bogotá, Ediciones Librería del Profesional.

Molina, J. (1952) Tratado teórico y práctico del derecho minero colombiano. Ed. El Igueina, Bogotá.

Paillet, M. (2001). La Responsabilidad Administrativa, Bogotá, Colombia, Universidad Externado de Colombia.

Patiño, H. (2011). Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual. Revista de Derecho Privado, n.º 20, Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C., enero-junio de 2011

Ramos, J. (1994) Responsabilidad extracontractual del Estado. Ediciones Universidad Libre. Cali.

Ruiz, W. (2013). Responsabilidad del Estado y sus regímenes. (II Edición), Bogotá: ECOE Ediciones.

Santaella, M. (2018). “El daño y la liquidación de los perjuicios en la responsabilidad precontractual y contractual del Estado”, Revista digital de Derecho Administrativo, Universidad Externado de Colombia, n.º 19.

Tamayo, J. (1997) La responsabilidad del Estado, el daño antijurídico, el riesgo excepcional y las actividades peligrosas. Bogotá: Editorial Temis.

Legislación

Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de Colombia de 1991. Gaceta Constitucional 116 de 20 de julio de 1991.

Congreso de la República. Constitución Política para la Confederación Granadina. 22 de mayo de 1858. [En línea] disponible en: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13697>

Consejo Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Colombia de 1886. Agosto 5 de 1886.

Consejo Nacional Legislativo. Ley 75 de 1887 Por la cual se concede un derecho preferente a los dueños de minas situadas en terrenos baldíos. Diario Oficial 7055 del 26 de mayo de 1887. Pág. 1.

Congreso de Colombia. Ley 30 de 1903 Sobre asuntos fiscales y de minas. Diario Oficial 11928 del 23 de octubre de 1903.

Congreso de Colombia. Ley 13 de 1937 Por la cual se dictan unas disposiciones sobre minas y se provee a la revisión del Código sobre la materia. Diario Oficial 23469 del 3 de mayo, 1937. artículo 1.

Congreso de Colombia. Ley 20 de 1969. Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre minas e hidrocarburos. Diario Oficial 32964 del 29 de diciembre de 1969. Artículo 1.

Congreso de la República. Ley 685 de 2001 “por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones”. Diario Oficial 44.545.

Congreso de la República. Ley 97 de 1993 “Por la cual se interpreta con autoridad la Ley 20 de 1969 y se dictan otras disposiciones”. Diario Oficial No. 41.143, de 20 de diciembre de 1993

Congreso de la República. Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA- y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial

Congreso de la República. Ley 97 de 1993 Por la cual se interpreta con autoridad la Ley 20 de 1969 y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 41.143 del 20 de diciembre de 1993.

Presidente de la República. Decreto 2636 de 1994 Por el cual se reglamenta el artículo 58 de la Ley 141 de 1994. Diario Oficial 41620 del 30 de noviembre de 1994, art. 1

Congreso de la República. Ley 388 de 1997 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”. Diario Oficial No. 43.127, de 12 de septiembre de 1997.

Congreso de la República. Ley 685 de 2001 Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 44.545 del 8 de septiembre de 2001.

Congreso de la República. Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”. Diario Oficial No. 48.102 de 16 de junio de 2011.

Congreso de la República. Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Diario Oficial Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011. Art. 140.

Congreso de la República. Ley 1658 de 2013 Por medio de la cual se establecen disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio en las diferentes actividades industriales del país, se fijan requisitos e incentivos para su reducción y eliminación y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 48.852 del 15 de julio de 2013.

Congreso de la República. Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

Decreto del Libertador de 1829 sobre conservación y propiedad de las minas contra cualquier ataque contra la facilidad de turbarla o perderla. Gaceta de Colombia, N° 443. Bogotá, 13 de diciembre de 1829, pp. s/n. Tomo IV.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Resolución No. 2090 del 19 de diciembre de 2014 “Por medio de la cual se delimita el Páramo Jurisdicciones – Santurbán – Berlín, y se adopta otras determinaciones”.

Presidente de la República. Decreto sobre conservación y propiedad de las minas contra cualquier ataque contra la facilidad de turbarla o perderla. Gaceta de Colombia 443 del 13 de diciembre de 1829.

Presidente de la República. Decreto 2655 de 1988 Por el cual se expide el Código de Minas. Diario Oficial 38.626 del 23 de diciembre de 1988. Artículo 13.

Presidente de la República. Decreto número 2390 de 2002 “Por el cual se reglamenta el artículo 165 del Código de Minas”.

Presidente de la República. Decreto 2191 de 2003 Por el cual se adopta el Glosario Técnico Minero. Diario Oficial 45271 del 6 de agosto de 2003.

Presidente de la República. Decreto 1631 de 2006 Por el cual se adiciona y se modifica el Decreto 2353 de 2001 reglamentario del inciso 2° del Artículo 227 de la Ley 685 de 2001 y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 46280 del 26 de mayo de 2006. Art. 1.

Presidente de la República. Decreto 4134 de 2011 Por el cual se crea la Agencia Nacional de Minería, ANM, se determina su objetivo y estructura orgánica. Diario Oficial 48.242 del 3 de noviembre de 2011. Art 17.

Presidente de la República. Decreto 1970 de 2011 Por el cual se modifica el Capítulo II del Decreto número 2715 de 2010. Diario Oficial 48.560 del 21 de septiembre de 2012. Art. 1

Presidente de la República. Decreto 933 de 2013. Por el cual se dictan disposiciones en materia de formalización de minería tradicional y se modifican unas definiciones del Glosario Minero. Diario Oficial 48785 de mayo 9 de 2013. Art. 1

Presidente de la República. Decreto 480 de 2014 "Por el cual se reglamenta las condiciones y requisitos para la celebración y ejecución de los subcontratos de formalización minera". Diario Oficial 49084 del 6 de marzo de 2014. Art. 1

Presidente de la República. Decreto número 1073 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía. Diario Oficial 49523 del 26 de mayo de 2015

Jurisprudencia

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 2 de febrero de 1984. Expediente: 2744. C.P Eduardo Suescún Monroy

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 20 de febrero de 1989. Expediente 4655

Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sección tercera. Sentencia del 30 de marzo de 1990, Exp. 3510

Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo, Sección tercera. Sentencia del 24 de octubre de 1990, exp: 5902.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera. Sentencia del 31 de octubre de 1991, exp. 6515

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 1994, expediente 9276

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 7 de julio de 2001. Rad. 13405

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera. Sentencia de 14 de marzo de 2002, exp:12076

Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo, Sección tercera. Sentencia del 2 de mayo de 2002. Exp. 1344.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 28 de febrero de 2002. Expediente: 13011.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 3 de mayo de 2003. Expediente: 16180

Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 19 de febrero de 2004, rad. 24027, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.

Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera. Sentencia del 16 de marzo de 2005. Rad. 27831.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 16 de agosto de 2006, Expediente: 15187.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 31 de agosto de 2006. Expediente: 19432.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 30 de agosto de 2006. Expediente: 22918

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006, rad. 16079, M.P. Ramiro Saavedra Becerra

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 3 de mayo de 2007. Expediente: 25020. C.P. Ramiro Saavedra Becerra

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 8 de marzo de 2007. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Radicación: 66001-23-31-000-1997-03613-01(16421).

Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 19 de octubre de 2007, Exp. 30.871

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de marzo 06 de 2008., Exp: 16075

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008. expediente 16530

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 2010, expediente 17179.

Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sección tercera, Sentencia del 26 de mayo de 2011, Exp. 20097.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 24 de marzo de 2011. Exp. 19067

Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de septiembre de 2011, Exp. 38.222

Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de septiembre de 2011, Exp. 19.031

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia 5 de marzo de 2015. C.P: Ramiro De Jesús Pazos Guerrero, Rad. 32444

Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sección tercera, Sentencia del 5 de marzo de 2015, Exp. 30102

Corte Constitucional. Sentencia T- 475. Julio 29/92. Mag. Pon. Eduardo Cifuentes

Corte Constitucional. Sentencia C-424 de 1994. MP. Fabio Morón Díaz, Exp. D-540

Corte Constitucional. Sentencia C-333 de 1996. MP. Alejandro Martínez Caballero.

Corte Constitucional. Sentencia C- 028 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero

Corte Constitucional. Sentencia SU-157 de 1999. MP. Alejandro Martínez Caballero.

Exp. T-153.327

Corte Constitucional. Sentencia C-832 de 2001. MP. Rodrigo Escobar Gil. Exp. D-3388

Corte Constitucional. Sentencia C-983 de 2010. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva. Exp. D-8171

Corte Constitucional. Sentencia C-644 de 2011. MP. Jorge Iván Palacio Palacio. Exp. D- 8422

Corte Constitucional. Sentencia C-366 de 2011. MP. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA, Exp. D-8250.

Corte Constitucional. Sentencia C-593. Agosto 20/14. Mag. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Corte Constitucional. Sentencia C-273 de 2016. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Expediente D-11075

Corte Constitucional. Sentencia T-445 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-
5.498.864

Corte Constitucional. Sentencia C-389 de 2016. MP. María Victoria Calle Correa. D-
11172

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de octubre 22 de 1896. Gaceta Judicial, Tomo
XIV, N° 685, pág.56

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 23 de junio de 2000,
expediente 5475

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de julio de 2005,
expediente 050013103011-1998-6592.

Tribunal Administrativo de Santander. Auto del 30 de julio de 2018. M.P: Solange
Blanco Villamizar.

Anexos

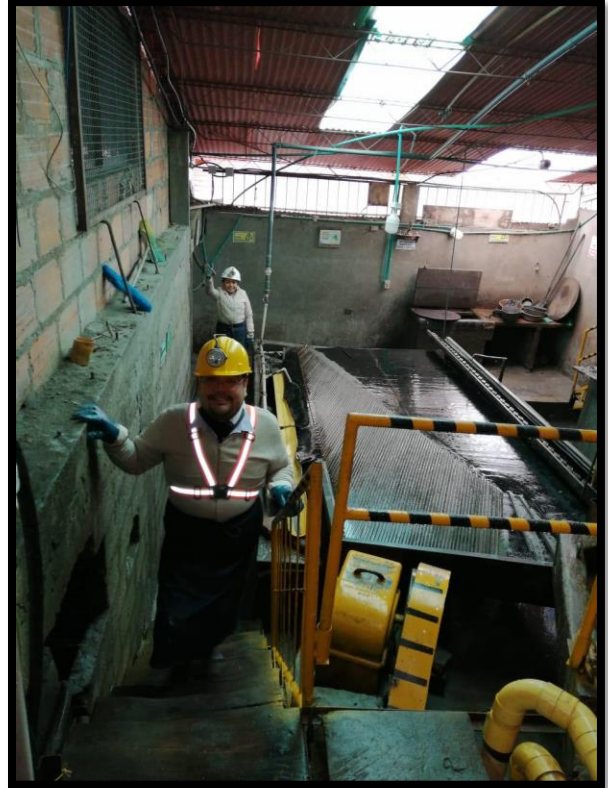
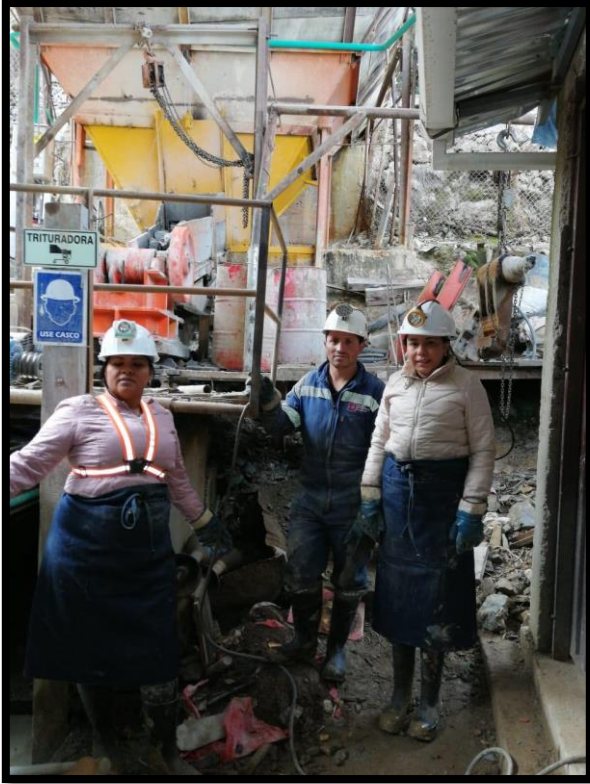
Anexo N° 01: Evidencia fotográfica de la actividad de observación en la empresa minera

“Reina de Oro S.A.S” ubicada en la vereda el Volcán del municipio de Vetas (Santander).











Anexo N° 02: Radicación y respuesta de Derecho de Petición de solicitud de información presentado a ASOMINEROS.

Anexo N° 03: Radicación y respuesta de Derecho de Petición de solicitud de información presentado a la Agencia Nacional de Minería.

Anexo N° 04: Entrevistas estructuradas realizadas a los mineros ancestrales del municipio de Vetás (Santander)